

65ª REUNION — Continuación de la 15ª SESION EXTRAORDINARIA
MARZO 4 Y 5 DE 1974

Presidencia del doctor JOSE ANTONIO ALLENDE, vicepresidente 1º del Honorable Senado, y del doctor ITALO A. LUDER, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Honorable Senado

Secretarios: señor ALDO HERMES CANTONI y escribana pública IRMA SOSA DE CESARETTI

Prosecretarios: señores RAFAEL ARANCIBIA LABORDA y DELFOR W. CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ALLENDE, José Antonio
ANGELOZ, Eduardo César
AVALOS, Pedro Isaac
BARBORA de NASIF, Yamili
BARONI, Danilo Luis
BELENGUER, Emilio
BLANCO, Rodolfo E.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo Norvel
BRIZUELA, Guillermo Ramón
BRIZUELA, Hugo Genaro
CAMPORA, Pedro L.
CANTONI, Apolo
CARNEVALE, Luis
CARO, J. Armando
CERRO, Francisco Eduardo
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
CULASSO MATTEI, Luis
CHAILE, Juan Carlos
D'AGOSTINO, Lucio Roque
DE LA RÚA, Fernando
DÍAZ BIALET, Alejandro
ESPERANZA, Joaquín Horacio
EVANS, Carlos H.
FONROUGE, Alberto M.
FRANCO, Carlos A.
FROIS, Domingo Andrés
FRUGOLI, Amadeo Ricardo
GARCIA, Américo Alberto
GARCIA, Justino
GRUBISICH, Pablo Eliseo
HERRERA, Dermidio Fernando L.
HERRERA, José Jorge
JAUREGUI, Rafael Zenón
LEÓN, Luis A.
LORENZO, Jorge Luis

LORENZO, Ramón
LOSADA, Mario
LUDER, Italo A.
LUNA, Pedro Antonio
MANCINI, Omar A.
MARTIARENA, José H.
MAYA, Héctor Domingo
MINICHELLI de COSTANZO, Martha S.
MOREIRA, Miguel Orlando
MORENO, Ramón Enrique
MURGUIA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio Oscar
PAZ, Eduardo Alberto
PENNISI, Afrio
PERETTE, Carlos H.
PERONI, Carmelo
POSE, Jorge Juan
PUGLIESE, Juan Carlos
RODRÍGUEZ, Ginés Froilán
ROMERO, Humberto Antonio
SAADI, Vicente Leónides
SALAS CORREA, Luis I.
SALMOIRAGHI, José César
VAL, Buenaventura Justo
VALLE de GONZALEZ, Leni Rosa
VIVAS, Angel Juan Gregorio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTE, CON LICENCIA:

BENI, Juan Carlos E.

AUSENTES, CON AVISO:

CACERES, Rubén Osvaldo
ELIAS, Florencio
MARTÍNEZ, Julio César
SAPAG, Elías
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo. (Pág. 3606.)
- II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificación del decreto ley 16.811/57 (Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio). (Página 3606.)
- III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen de universidades nacionales. (Página 3607.)
- IV.—Mensaje del Poder Ejecutivo sobre ampliación del temario de las sesiones extraordinarias. (Página 3615.)
- V.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre expropiación de terreno para el Liceo Militar General Belgrano (Santa Fe). (Página 3615.)
- VI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre resguardo del patrimonio cultural de la Nación. (Página 3616.)
- VII.—Mensaje del Poder Ejecutivo sobre ampliación del temario de las sesiones extraordinarias. (Página 3618.)
- VIII.—Mensaje del Poder Ejecutivo remitiendo antecedentes sobre la situación institucional de la provincia de Córdoba. (Página 3618.)
- IX.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre intervención a la provincia de Córdoba. (Página 3620.)
- X.—Comunicación oficial. (Página 3620.)
- XI.—Comunicación de comisión. (Página 3620.)
- XII.—Dictamen de comisión. (Página 3620.)
- XIII.—Peticiones particulares. (Página 3621.)
- XIV.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Baróni y Rodríguez sobre medidas a adoptar con motivo de las inundaciones en la provincia del Chaco. (Página 3621.)
- XV.—Proyecto de ley del señor senador Frois creando una comisión para ordenar y depurar la legislación nacional. (Página 3621.)
- XVI.—Proyecto de ley del señor senador Luna por el cual se crea una escuela de artesanos en Santiago del Estero. (Pág. 3623.)
- XVII.—Proyecto de ley del señor senador Luna sobre ramal ferroviario en la provincia de Santiago del Estero. (Página 3623.)
- XVIII.—Proyecto de ley del señor senador Cerro sobre régimen de universidades nacionales. (Página 3624.)
- XIX.—Proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez sobre creación de una facultad en la Universidad Nacional del Nordeste. (Página 3632.)

- 2.—Invitación a los señores senadores para asistir a la reunión en honor del señor presidente del Consejo de Estado de la República Socialista de Rumania. (Página 3636.)
- 3.—A moción del señor senador Martiarena se resuelve pasar a cuarto intermedio hasta la hora 21. (Página 3637.)
- 4.—A moción del señor senador Martiarena se resuelve diferir el tratamiento del proyecto de ley universitaria y considerar sobre tablas el proyecto de ley de intervención a la provincia de Córdoba. (Página 3637.)
- 5.—Consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales Administrativos y Municipales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre intervención a la provincia de Córdoba. Se aprueba el despacho de la mayoría con modificaciones. (Página 3638.)
- 6.—A moción del señor senador Rodríguez se resuelve postergar la consideración del proyecto de comunicación sobre medidas a adoptar con motivo de las inundaciones en la provincia del Chaco. (Página 3673.)
- 7.—Apéndice:

Sanción del Honorable Senado. (Página 3673.)

—En Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo de 1974, a la hora 16, dice el

Sr. Presidente (Allende). — Continúa la sesión que pasara a cuarto intermedio el día 22 de febrero próximo pasado.

I

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Allende). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

I

Acuerdo

Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo. (*A la Comisión de Acuerdos.*)

II

Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio. Modificación del decreto ley 16.811/57. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 14 de febrero de 1974.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo de la Nación tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad sometiendo a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el cual se modifica el artículo 4º del decreto ley 16.811/57 que

Sr. Cerro. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Cerro. — Nuestro bloque va a apoyar la proposición del presidente del bloque de la mayoría.

Conforme lo solicitaron los diputados nacionales de la Alianza Popular Revolucionaria en su momento, pidiendo que se incluyera el tratamiento de los problemas de la provincia de Córdoba en las sesiones extraordinarias, y consecuentes con esa posición, apoyamos el tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente (Allende). — Se va a votar, en primer término, la moción formulada en el sentido de diferir el tratamiento del proyecto de ley universitaria hasta la próxima sesión de tablas.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Allende). — Se va a votar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre intervención a la provincia de Córdoba.

—Se vota y resulta afirmativa.

5

INTERVENCION A LA PROVINCIA DE CORDOBA

Sr. Presidente (Allende). — Por Secretaría se dará lectura al dictamen en mayoría y a los dictámenes en minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre intervención a la provincia de Córdoba.

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

Dictamen de comisión en mayoría

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales ha considerado el mensaje y el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se declara intervenida la provincia de Córdoba y, por sus fundamentos, os aconseja su aprobación, con la siguiente modificación:

Artículo 2º — El delegado federal decretará la caducidad de los mandatos del señor gobernador y del señor vicegobernador.

Sala de la comisión, 4 de marzo de 1974.

Alberto M. Fonrouge. — Vicente Leóntides Saadi. — Héctor Domingo Maya.

ANTECEDENTE

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase intervenida la provincia de Córdoba, a los efectos de restablecer su forma republicana de gobierno.

Art. 2º — El delegado federal decretará la caducidad del Poder Ejecutivo y procederá a su reorganización.

Art. 3º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de rentas generales, con imputación a la misma.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dictámenes de comisión en minoría

I

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales ha considerado lo relativo a la situación de la provincia de Córdoba; y, por los fundamentos que se exponen y los que dará el miembro informante en minoría, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Dispónese la intervención federal en la provincia de Córdoba a fin de reponer en sus funciones al gobernador y vicegobernador de la provincia y demás autoridades destituidas por la sedición de las fuerzas policiales, y restablecer el orden y la paz pública.

Art. 2º — El delegado federal cumplirá su misión en un plazo no mayor de treinta días y se pondrán a su disposición las fuerzas nacionales de seguridad que sean necesarias.

Art. 3º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de rentas generales, con imputación a ella.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fernando de la Rúa.

INFORME

Señora presidenta:

Es lamentable que conflictos internos del partido gobernante se extiendan del modo que ha ocurrido en Córdoba, con manifestaciones de violencia, al plano institucional. Urge que se pueda encontrar el rumbo y evitar enfrentamientos que conmocionen al país como hoy han conmocionado a esa provincia. No nos toca examinar su origen ni juzgar al gobierno local, del cual nuestro partido es opositor. Pero juzgamos la realidad institucional, y frente a ella nos convenimos que si no se le da el rápido y debido remedio, quedará el rastro de un ejemplo lamentable de imprevisibles consecuencias futuras.

Frente al típico acto de sedición ocurrido en la provincia, la situación sólo puede superarse mediante la intervención del gobierno central, pero no para servir los objetivos sediciosos, sino para evitarlos reparando el orden constitucional mediante la reposición de la autoridad legítima y asegurando el orden y la paz pública (Constitución Nacional, artículo 6º, segunda parte).

Así se restablecerá el prestigio de las instituciones y se protegerá la tranquilidad y la paz de la población. De lo contrario, si en Córdoba hay crisis, también el gobierno nacional sufrirá el deterioro y un pésimo antecedente se habrá incorporado a la historia de la Federación.

Fernando de la Rúa.

II

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo; y, por las razones que dará el miembro informante en minoría, aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—El gobierno de la Nación interviene en la provincia de Córdoba a los fines de asegurar el régimen republicano de gobierno y la restitución en sus funciones de sus autoridades legítimas, en los términos del artículo 6º de la Constitución Nacional.

Art. 2º—El Poder Ejecutivo nacional designará, en el término de doce horas, al funcionario que hará cumplir la presente ley y dispondrá la movilización de todas las fuerzas de seguridad necesarias a tal fin.

Art. 3º—Constituir una comisión bicameral compuesta por tres senadores y tres diputados nacionales, que tendrá a su cargo la realización de las investigaciones necesarias sobre los hechos sucedidos y su evolución.

Art. 4º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Francisco Eduardo Cerro.

Sr. Presidente (Allende).—En consideración en general.

Sr. Jáuregui.—Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende).—Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Jáuregui.—He pedido la palabra, señor presidente, para reiterar mi solicitud de que el cuerpo invite a participar de la sesión al señor ministro del Interior.

Sr. Presidente (Allende).—Está en consideración la moción del señor senador Jáuregui de invitar al señor ministro del Interior a hacerse presente en el recinto.

Sr. Martiarena.—Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende).—Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena.—El bloque de la mayoría no estima necesaria la presencia del señor ministro del Interior en esta emergencia. Los mensajes que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso, el conocimiento de la situación de Córdoba y la exhaustiva documentación acompañada, aparte que los acontecimientos han tomado estado público por diversas vías, incluso la periodística, han determinado que los sucesos sean plenamente conocidos. Creemos que la posición que ha adoptado el Poder Ejecutivo está explicitada suficientemente en sus mensajes, y por eso el bloque de la mayoría no va a dar su consentimiento para que se invite al señor ministro del Interior.

Sr. León.—Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende).—Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León.—Señor presidente: debo expresar que nos resulta sorpresivo, y nos duele que la bancada mayoritaria niegue la presencia en el

recinto del señor ministro del Interior, representante político del Poder Ejecutivo. Los señores senadores de dicha bancada tienen todo el derecho del mundo de evaluar, de acuerdo con su criterio, que puede ser exhaustiva la información publicada por los diarios y la contenida en los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo; pero nosotros somos senadores de la Nación y tenemos que legislar con gran responsabilidad, máxime en una circunstancia casi dramática, donde aparece por primera vez consumado el hecho bochornoso de la prisión de un gobernador por la sedición irresponsable protagonizada por un hombre de la Policía de una provincia.

Existen, a nuestro criterio, algunas cuestiones sobre las que nos preocupa estar informados, y me parece que sería útil, generoso, comprensivo y democrático de parte de la mayoría que acepte la presencia en el Senado del señor ministro del Interior, porque seguramente jerarquizará el debate, y posibilitará un aporte más completo en lo que se refiere a nuestra responsabilidad de contar con mejor información para legislar con sentido de recuperación institucional, con el que seguramente cada uno de los señores senadores está de acuerdo se desarrolle el debate, tan importante para el país, que significa la defensa del federalismo.

Por ello, quiero dejar expresada la posición de nuestro bloque de requerir también la presencia en esta sesión del señor ministro del Interior.

Sr. Presidente (Allende).—Si ningún señor senador hace uso de la palabra, se va a votar la moción por la que se invita a concurrir al recinto al señor ministro del Interior.

—Se vota y resulta negativa.

Sr. Presidente (Allende).—Queda rechazada la moción.

En consideración en general el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales, en mayoría.

Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Fonrouge.—Honorable Senado: lamentablemente, el cuerpo debe resolver sin perder más tiempo un grave problema político, cuya trascendencia compromete la tranquilidad del país. Es una responsabilidad que debemos afrontar todos en favor de la salud de la República. La mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que suscribe el despacho, es solidaria con el Poder Ejecutivo nacional, que ha levantado la bandera de la paz entre los argentinos y que en la coyuntura dramática que se da en Córdoba nos demanda sobrellevar el sacrificio.

Repasando los fundamentos que formula el Poder Ejecutivo en su proyecto, se encuentran sobradas razones para que este Honorable Senado decida su pronunciamiento. Sostiene que en Córdoba, sobre todo en las últimas horas, se ha

producido una aceleración de hechos negativos que debe encontrar sin demoras ni hesitaciones una solución que restaure la seguridad de sus habitantes. Agrega que a partir del momento en que el señor gobernador, doctor Ricardo Obregón Cano, y el señor vicegobernador, don Atilio López, recuperan su libertad de acción —luego de los incidentes conocidos— comienza a incrementarse un ambiente de tensa expectativa incitado paulatina y planificadamente por la acción de grupos sediciosos armados cuyo propósito ostensible es generar el caos. Agrega el Poder Ejecutivo que «los enfrentamientos con lamentables pérdidas de vidas se suceden», y afirma que «una operación de más envergadura, que podría contar con fuerzas de mayor importancia, se encuentra en pleno curso de realización. Evidente resulta el aceptar que la situación local no puede ser ya controlada por las autoridades provinciales y que este hecho aparece como irreversible». «Es por todo ello —termina—, y para asegurar la vida, derechos, libertades y bienes de todos los habitantes de ese Estado que este Poder Ejecutivo, asumiendo las facultades que la Constitución Nacional le otorga, cumple con elevar a vuestra honorabilidad un proyecto de ley por el que se dispone la intervención federal.»

La mayoría de la comisión ha estimado conveniente introducir una reforma al artículo 29 del proyecto, cuyo texto es el que se ha leído por Secretaría. Pero la modificación no importa limitaciones para la acción del delegado, desde que este remedio lamentable y desgraciado que el Poder Legislativo deberá sancionar en resguardo de la tranquilidad comprometida debe tener la fluidez necesaria para afrontar el problema cabalmente.

Se trata de estimar una realidad palpable. La provincia de Córdoba, a través de la información que los diarios han difundido, ofrece un cuadro de gran peligro. No es solamente la estructura institucional del Estado la que está sufriendo duro embate en estas circunstancias, sino que es la vida de los habitantes, quizá la de aquellos que menos tienen que ver con esta contienda política, la que reclama protección urgente.

Si estas razones no se tuvieran como suficientes, por graves y delicadas, para que el Poder Ejecutivo, en uso de las facultades constitucionales, actuara como lo hace, habría sobrado derecho para suponer no sólo negligencia sino insensibilidad frente a tamaño evento. Porque lo que ocurre en Córdoba, con la magnitud que el periodismo argentino viene reflejando, no es un fenómeno que podamos suponer limitado a las fronteras de aquella provincia, sino que acusa una dinámica capaz de complicar a toda la República en una ola de efectos cuya fuerza destructiva quizá mañana sea mucho más dolorosa.

Entiendo que estas consideraciones traducen un estado de ánimo generalizado y es lo que explica que el bloque de la mayoría se sienta instado a votar rápidamente, preocupación que

no escapa a los demás sectores que tienen representación en este Honorable Senado. En la comisión se han manifestado esas inquietudes y a través de las palabras de los señores senadores de la Rúa y Cerro, se han puesto de relieve expresiones semejantes, tan acentuadas como las nuestras. En sus propias iniciativas se señala también la indispensabilidad del mismo remedio constitucional.

Frente al episodio, a la gravedad de los acontecimientos y la urgencia del problema, quizá podríamos afirmar que todo lo demás queda en matices.

Nadie podría discutir que hay sedición en Córdoba. Sí, sería una irreverencia pretender un argumento en contra. Pero el momento de la sedición pasó sin que haya amainado la gravedad de los acontecimientos que se viven en la provincia. Es necesario, dramáticamente necesario, sopesar la realidad y mirar hacia adelante.

Es cierto que si fuéramos ortodoxos en la interpretación del texto constitucional, la intervención podría reponer a las autoridades depuestas; pero también es cierto que los depuestos carecen ya de la autoridad y gravitación correspondientes como para que puedan reasumir la administración e imponer el orden en la provincia.

Lo que se juega en esta hora en la República es la salud, la seguridad y tranquilidad nacionales. En la escala de valores que aceptamos, la vida de la Nación, de todos sus habitantes, vale tanto o más que la exégesis del texto constitucional.

La Constitución precisa las razones y circunstancias en que el gobierno federal debe intervenir para salvar a una provincia del deterioro institucional. Pero si en estos momentos el Parlamento, requerido por el Poder Ejecutivo para colaborar en una acción salvadora, no comprendiera el desafío de las circunstancias, cargaría con serias responsabilidades. De ahí que el Senado de la Nación debe sancionar esta noche, antes que sea tarde, una ley, que aunque no sea perfecta —nada hay perfecto en este mundo— será perfectible a través de un delegado, que deberá cumplir sobre el terreno, ante las realidades más urgentes, con los remedios indispensables, cuanto sea aconsejable para garantizar la vida y el porvenir de la Nación.

Córdoba está en peligro. La provincia hermana tiene derecho a exigir que todos contribuyamos de inmediato a que se adecue su marcha política, social y económica. Por estas razones, señor presidente, la mayoría de la comisión entiende que el proyecto del Poder Ejecutivo se ajusta a las necesidades circunstanciales y que logrará el objetivo propuesto.

Nada más.

Sr. Angeloz. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Angeloz. — Señor presidente, señores legisladores: un acto de sedición, perpetrado recientemente en la provincia de Córdoba, ha sido

el punto de partida del proceso que perturba hondamente a la ciudadanía de mi provincia y al pueblo todo de la República.

Inaceptable en nuestro estado de derecho y absolutamente reñido con los principios y procedimientos democráticos, ese acto de sedición ha intentado retrotraernos a las épocas en que la fuerza de las armas prevalecía, de hecho, sobre la Constitución, sobre las leyes y sobre la voluntad del pueblo.

Ese es el hecho que, a mi juicio, debe ser considerado en primer término, porque en ese acto sedicioso se halla el origen de los graves acontecimientos posteriores que han ensombrecido el panorama institucional y político de mi provincia.

A tales extremos se llega cuando alguien, sea quien fuere, cree legítimo quebrantar la normalidad institucional y resuelve deponer a las autoridades constituidas, arrogándose de este modo la potestad de violentar la voluntad soberana del pueblo.

Si los actos insurreccionales de esta índole quedaran impunes y no se impusiera inmediato remedio a las consecuencias que ellos producen, la vigencia de nuestras instituciones volvería a hallarse bajo constante amenaza de interrupción, y nuestro orden jurídico nuevamente quedaría sujeto a quiebras y debilitamientos inadmisibles.

De allí surge, señor presidente, la primera e incontestable objeción que cabe oponer a este proyecto, mediante el cual se pretende intervenir al Poder Ejecutivo de Córdoba.

Disponer esa intervención equivaldría a consentir el definitivo derrocamiento de los gobernantes que fueron depuestos y encarcelados *manu militari* por el ex jefe de policía de la provincia.

De ese modo, se admitiría virtualmente, como un hecho consumado y ya irrevocable, la consecuencia inmediata de la sedición. Y más aún: quedaría implícitamente reconocido que esa sedición fue razonable, al confirmarse la destitución de las autoridades, cuyo derrocamiento fue el principal objeto de la acción sediciosa.

Con respecto a las autoridades legítimas de mi provincia y obedeciendo a la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, el gobierno federal debería proceder a «restablecerlas», tal como lo impone el artículo 69 de la Ley Fundamental, en los casos en que las autoridades provinciales lo requieran al ser «depuestas por la sedición».

Ese, y no otro, es el remedio constitucional pertinente. Esa es la actitud que debe asumir el gobierno federal, para no cohonestar, de ningún modo, ese acto sedicioso que ha provocado el estupor y el repudio de toda nuestra ciudadanía democrática.

El gobierno federal no puede ni debe omitir el cumplimiento del deber que le fija la Constitución Nacional, en el sentido de respaldar y reponer a los legítimos gobernantes cordobeses

que han sido depuestos por un funcionario provincial insurrecto. Por otra parte, el acto de insurrección de ese funcionario —el que además se halla cuestionado en sede judicial y sobre el cual pesan gravísimas acusaciones—, no ha sido objetado, ni expresa ni implícitamente, por el Poder Ejecutivo nacional en el mensaje con el cual se acompaña el proyecto de intervención.

Frete a esa importante omisión del Poder Ejecutivo, adquiere más fuerza y mayor fundamento la tesis de que intervenir el Poder Ejecutivo de Córdoba implicaría, en este momento, convalidar las derivaciones de la sedición y hasta reconocer la razonabilidad y conveniencia de deponer definitivamente a las autoridades constituidas.

Además, señor presidente, el Poder Ejecutivo nacional ha manifestado con insistencia en declaraciones recientes, su propósito de respetar estrictamente el federalismo, absteniéndose de intervenir en las provincias, para que sus problemas internos se diluciden y resuelvan dentro de su propio ámbito. Al formular esas declaraciones, el Poder Ejecutivo no ha hecho más que reconocer el acatamiento que debe a uno de los principios básicos de nuestro sistema constitucional. En vista de ello, este proyecto de intervención resulta inconciliable con esas reiteradas manifestaciones.

Cabe preguntarse si bastará, desde ahora, que un nuevo movimiento sedicioso deponga a otras autoridades provinciales, para que el Poder Ejecutivo nacional, en lugar de concurrir a restablecerlas, crea lícito allanar, total o parcialmente, por ese hecho, la autonomía de otras provincias argentinas.

Al respecto es preciso recordar los preceptos pertinentes de la Constitución Nacional y sus antecedentes históricos.

En el artículo 59 del proyecto constitucional redactado por Alberdi, se establecía que la Confederación «interviene sin requisición» en el territorio de las provincias, «al solo efecto de restablecer el orden perturbado por la sedición».

El artículo 69 de la Constitución de 1853 preceptuaba: «El gobierno federal interviene con requisición de las legislaturas y gobernadores provinciales, o sin ella, en el territorio de cualquiera de las provincias, al solo efecto de restablecer el orden público perturbado por la sedición.»

La Convención Constituyente del año 1860, que robusteció considerablemente la autonomía de las provincias, modificó ese artículo, limitando la atribución del gobierno federal de intervenir en las provincias, estableciendo que solo procedía intervenirlas en ese caso «a requisición de sus autoridades constituidas» y a fin de «sostenerlas o restablecerlas».

Refiriéndose a esa atinada reforma del artículo citado, Bielsa, en su obra *Derecho constitucional* ha escrito que «esa facultad, demasiado extensa, de intervenir sin requisición de

los poderes locales, por asuntos de orden doméstico, afectaba de tal manera la paz, que podía encender una guerra civil, o dar lugar a abusos del gobierno federal, que destruyesen toda la independencia de las provincias».

En el caso que examinamos, resulta de suma importancia determinar si las autoridades provinciales depuestas han requerido, o no, el auxilio del gobierno federal para lograr su reposición en los cargos de los que fueron despojados por la fuerza. Esa solicitud ha existido, señor presidente, y el gobierno federal está constitucionalmente obligado a satisfacerla.

En efecto, desde el territorio de la provincia de Córdoba y en compañía del vicegobernador y de casi todos los miembros de su gabinete, el legítimo gobernador de la provincia, una vez recuperada su libertad, ha emitido un mensaje cuyo texto íntegro es de público conocimiento, porque en forma literal ha sido publicado y ampliamente difundido por la prensa argentina. De modo que nadie podría aducir que ignore el citado documento.

En su punto tercero, Obregón Cano afirma textualmente: «... me he dirigido al señor ministro del Interior, en mi carácter de gobernador e invocando el artículo 6º de la Constitución Nacional, reclamándole el auxilio de la fuerza de la Nación para reducir al grupo sedicioso y garantizar el pleno ejercicio del poder que ejerzo en nombre de la ley. Los hechos que denuncio (se refiere a la sedición) son públicos y notorios y ninguna autoridad puede, razonablemente, invocar la ignorancia de aquéllos. Habiéndome privado por la fuerza del uso de la red presidencial, instalada en la Casa de Gobierno, único modo de tomar contacto directo con las autoridades nacionales, formalizo por este medio mi petición ante el señor presidente de la Nación y el Honorable Congreso, a fin de que se adopten inmediatamente los recaudos constitucionales para que sea respetada la voluntad soberana del pueblo de Córdoba, expresada en los comicios que me consagraron gobernador». Requiere, así mismo, que se respeten «la autonomía provincial y la autoridad incondicionada de los legítimos gobernantes».

La requisición ha sido formulada, pues, por la autoridad provincial legítima y con expresa invocación del artículo pertinente de la Constitución Nacional. Si alguien adujera que se trata de un requerimiento tardío o que no ha sido formalizado directamente ante el Gobierno Federal, sería muy fácil refutarlo. No ha sido tardío, en razón de que el gobernador de Córdoba ha estado privado de su libertad e impedido de formular con mayor celeridad ese requerimiento. Además, el medio empleado para dirigir esa solicitud al Poder Ejecutivo y al Honorable Congreso de la Nación, vale decir, su difusión por el periodismo, era la única vía utilizable en momentos en que, pese a haber sido exonerado y a estar acusado por el agente fiscal, el mismo ex funcionario que había encabezado

la sedición, continuaba al mando de buena parte de las fuerzas policiales de la provincia e impedía al gobernador el empleo del medio directo de comunicación.

Nadie ignora que desde el atropello de que fueron objeto el gobernador, el vicegobernador y un elevado número de funcionarios provinciales, Córdoba se ha convertido en el escenario de una serie de hechos deplorables que tienen su causa inmediata en la acción sediciosa. Se han sucedido los atentados terroristas y los enfrentamientos a mano armada; se ha causado la muerte hasta de personas absolutamente ajenas a dichos enfrentamientos y se ha atentado contra «La Voz del Interior», uno de los órganos más prestigiosos del periodismo argentino.

Frente a este estado de cosas, es evidente que la Unión Cívica Radical, cuando exhorta a la reposición de las autoridades legítimas, no obedece a ningún móvil sectario puesto que tales gobernantes no proceden de nuestro partido e, incluso, en nuestra opinión, han sido y son pasibles de severas críticas por diversos actos de gobierno que juzgamos desacertados.

Aquí no se trata de defender o de acusar a las personas del gobernador y del vicegobernador de Córdoba, ni de poner en tela de juicio su gestión para señalar sus aciertos y los desaciertos en que han incurrido. Aquí se trata de una sedición contra las autoridades legítimas de una provincia, una sedición que debe ser condenada y absolutamente desbaratada mediante la supresión de sus consecuencias y el enjuiciamiento de los responsables.

La actitud sediciosa del ex jefe de Policía de la provincia —la denuncia aquí, en el Senado— ha comenzado a ser emulada por los comisarios de campaña que están deponiendo a los intendentes peronistas y radicales, incurriendo así en un absoluto desconocimiento de las normas vigentes y en una franca violación de la voluntad popular.

Sr. Fonrouge. — ¿Me permite una breve interrupción?

Sr. Angeloz. — Sí, señor senador.

Sr. Fonrouge. — Convendría que concretara en tales casos las denuncias que está formulando.

Sr. Jáuregui. — Por eso queremos que venga el señor ministro del Interior.

Sr. Angeloz. — A fin de poder ilustrar al Honorable Senado, tal vez porque la comisión no lo ha hecho con la eficiencia que cabía, debo decirle al señor senador que se encuentran en esa situación la intendencia de Alejandro, que es de filiación peronista; la de Sampacho, que es radical, y la de Arroyito, departamento de San Justo, que también es radical. Todas las gestiones las hemos hecho ante la policía, si era posible hacerlas, o ante el juez de turno para que repusieran inmediatamente en el cargo a los respectivos intendentes y se dejara sin efecto esa actitud, que era la continuación de la acción sediciosa iniciada por el jefe de Policía.

Continúo, señor presidente. Todo esto es lesivo para las instituciones. Pero la situación planteada en Córdoba, si el Honorable Senado no la repara, será funesta para las restantes provincias argentinas, porque de ese modo quedará legalizada la sedición y sobreesidos los funcionarios que deben ser imputados y juzgados por los tribunales, para que no se enerve en el pueblo la confianza que debe merecerle la justicia argentina como último reducto de las garantías y derechos individuales.

Digo, señor presidente, que para restaurar esto bastaría la gestión de un delegado federal quien, dotado de la fuerza y de la prudencia necesarias, podría restablecer el orden actualmente subvertido. Su gestión, si fuera realmente imparcial y reparadora, constituiría la adecuada respuesta al requerimiento de apoyo que ha formulado, en los términos del artículo 69 de la Constitución Nacional, el gobernador de la provincia al gobierno federal.

No obstante que el proyecto de intervención se circunscribe al Poder Ejecutivo provincial y no abarca a los poderes restantes, aun así estimo que la intervención resultaría desaconsejable e improcedente. La situación planteada exige un examen detenido y minucioso. Ese análisis debe partir del hecho desencadenante, es decir, del desconocimiento de las autoridades provinciales legítimas en que incurrió el ex jefe de la Policía cordobesa, teniente coronel, en retiro, Antonio Navarro.

En consecuencia, trataré de exponer los hechos y los examinaré desde los puntos de vista constitucional, jurídico y político.

I. El delito de sedición y la Constitución Nacional.

La sedición es de los pocos delitos mencionados expresamente por nuestra Constitución Nacional, cuyo artículo 22 expresa: «El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición».

La vulneración del principio básico de la representatividad consagrado en el artículo inicial de nuestra Carta Magna, es sedición.

Por su parte, nuestro Código Penal, dentro del título X que lleva como epígrafe «Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional» en su capítulo 29, relativo a sedición, expresa en el artículo 229 que «serán reprimidos con prisión de uno a seis años los que sin rebelarse contra el gobierno nacional armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre

ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidos en la ley».

González Roura expresa «que los casos contemplados en el citado artículo 229 del Código Penal pueden abarcarse en la denominación común de alzamiento en armas de carácter colectivo, ostensible y público, para disputar en todo o en parte el ejercicio del poder mediante el uso de la fuerza».

Y esta fuerza ha de ser proporcionada, suficiente y capaz de lograr sus propósitos delictivos. No es requisito, sin embargo, que los propósitos de los alzados se consumen, bastando pues, para configurar el delito, que el alzamiento se realice. «Es decir, que habrá sedición cuando el alzamiento en armas busque deponer alguno de los poderes públicos provinciales, ya fuere el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, usando de la violencia para deponer a las personas que los desempeñan».

Estos delitos, como bien lo señala Soler, son los que comúnmente se han denominado «delitos de los derrotados», pues si la sedición triunfa los individuos que hubieran sido condenados en caso de no haber tenido éxito son promovidos por el nuevo orden jurídico a situaciones aparentemente legítimas y de mayor beneficio que las que ocupaban hasta entonces.

La historia institucional de nuestra Nación desde 1930 ofrece tantos ejemplos que no es necesario insistir a este respecto.

Lo expuesto también justifica la opinión de Soler cuando alerta sobre la estructuración de este tipo de delitos al afirmar que la configuración se da ya en las acciones que quedan en la fase de atentado, siendo ésta la condición necesaria para la aplicabilidad de la ley misma.

Más concretamente, toda esta exposición nos lleva a desembocar en la historia del gobierno de facto. Desde este punto de vista, lo ocurrido en Córdoba es un verdadero golpe de Estado, tanto por sus motivaciones como por sus fines dentro de la esfera provincial.

II. La situación de hecho vivida en Córdoba y su adecuación a lo expuesto.

El día miércoles 27 de febrero pasado, por decreto del Poder Ejecutivo provincial, cesa en sus funciones como jefe de Policía de la provincia el teniente coronel Antonio Domingo Navarro, y se nombra en su reemplazo al comisario inspector Cuello.

En las primeras horas de la tarde de ese mismo día, el ya ex jefe de Policía Navarro, desconociendo lo dispuesto por el Poder Ejecutivo de la provincia, acuartela los efectivos policiales de la ciudad y pide refuerzos a las comisarias del interior de Córdoba, alzándose de ese modo en armas contra las autoridades constituidas legítimamente, y que eran fruto de la expresión soberana del pueblo que se había expedido libremente el 15 de abril de 1973, oportunidad en que resultó derrotada la Unión Cívica Radical.

Al anochecer de ese día, el gobierno de la provincia, al tener conocimiento de la actitud sediciosa del mencionado Navarro, por otro decreto exoneró a éste en sus funciones, y acto seguido asumió en la Casa de Gobierno su reemplazante Cuello. A todo esto, los efectivos policiales comandados por el militar alzado tomaban emisoras locales y comenzaban a irradiar comunicados en contra de las autoridades de la provincia, haciéndoles imputaciones de toda especie que llegaban incluso a la injuria personal. En dichos comunicados se acusaba a las autoridades provinciales de no profesar la ideología del oficialismo, tal como la definiera su jefe y actual presidente de la Nación.

III. La aparición de grupos civiles armados.

Simultáneamente hacían su aparición en diversos sectores de la ciudad de Córdoba, e incluso de la provincia, grupos civiles armados que se identificaban como leales al jefe del movimiento justicialista, actuando en la mayor impunidad, y sumiendo a la población toda en un estado de zozobra, de temor, de angustia, de ansiedad y aprovechando, diríamos, la situación de desamparo en que se encontraba la provincia como consecuencia de la sedición policial.

IV. Detención de las máximas autoridades de la provincia.

Alrededor de la hora 23 del día 27 de febrero, la policía rodeaba la Casa de Gobierno y, penetrando en su interior fuertemente armada, procedió a la detención del gobernador, del vicegobernador, del presidente provisional del Senado provincial, del ministro de Gobierno, de legisladores provinciales y comunales y otros funcionarios públicos de alta jerarquía, quienes fueron víctimas de atropellos verbales y de hecho. Se los condujo en calidad de detenidos al Comando Radioeléctrico, donde fueron alojados. Interrogado el ex jefe de policía Navarro sobre los motivos de las detenciones, adujo que las había efectuado porque en la Casa de Gobierno se repartían armas. Esto, hasta hoy, ha convencido a pocos lectores y oyentes, y ni siquiera ha sido comprobado.

Como se podrá apreciar, en virtud de lo expuesto y sin querer abundar en mayores consideraciones, el delito de sedición y una serie de otros delitos conexos fueron cometidos en Córdoba con motivo del alzamiento armado del ex jefe de policía.

V. Actuaciones del gobierno nacional.

Verificada la sedición en la provincia y detenidas sus máximas autoridades, se imponía actuar de acuerdo con el artículo 6º de la Constitución Nacional, relativa a la intervención federal. Dicho artículo expresa: «El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra

provincia». Es decir, dicho precepto legal prescribe un remedio o una forma de actuación determinada a cargo del gobierno federal que debe ponerse en práctica en todos y en cada uno de los casos en que se den las condiciones que dicho artículo contempla.

Comentando el artículo citado podemos afirmar que el mismo, tal como lo destaca Vanossi, prevé dos formas de intervención, en principio: 1º, espontánea, que tiene lugar en dos casos: a) para garantizar la forma republicana de gobierno, y b) para repeler las invasiones externas. Su declaración siempre corresponde al gobierno nacional. Se trata de defender principios nacionales comunes: en el primer caso, la República; en el segundo, el territorio. 2º, requerida: tiene lugar para sostener o restablecer a las autoridades constituidas, depuestas por sedición o por invasión de otra provincia.

Agrega el doctor Vanossi que en caso de urgencia el Poder Ejecutivo puede declarar la intervención en esos casos. Lo mismo opina González Calderón en *Derecho constitucional*, tercera edición, capítulo VI, páginas 129 y sucesivas.

En consecuencia, bajo un declamado respeto a la autonomía provincial, el Poder Ejecutivo nacional no puede substraerse a lo que específicamente señala el artículo 6º para el caso de que las autoridades de una provincia determinada hayan sido depuestas por un acto de sedición.

Por otra parte, y como bien lo destaca el profesor César Enrique Romero en el caso específico de Córdoba, «la aparente dificultad estaría en la exigencia de que la intervención para reponer al gobernador y al vicegobernador sea solicitada por dichas autoridades constituidas». En este caso el gobierno federal pudo prescindir de tal requisito, ante la imposibilidad, por su detención, de que las autoridades pudieran hacer la requisitoria y más aún teniendo en cuenta que el gobierno nacional debió sin duda estar bien informado de la grave situación provincial.

De modo que el gobierno federal no ha podido eludir ni substraerse al mecanismo previsto por el artículo 6º de nuestra Constitución; situación más comprensible aún si se considera que el gobernador, una vez que hubo recuperado su libertad, solicitó de inmediato la intervención de las fuerzas federales para hacer respetar su investidura y restablecer la forma republicana de gobierno, que es el bien jurídico protegido por el citado precepto constitucional.

VI. La sucesión del presidente de la Honorable Cámara de Diputados provincial.

En cuanto a la sucesión en el cargo de gobernador, rige el artículo 100 de la Constitución de la provincia de Córdoba, que reza: «En caso de separación o impedimento simultáneo del gobernador y vicegobernador, el mando será ejercido por el presidente provisorio del Senado; en defecto de éste, por el presidente de la Cámara de Diputados, quien convocará dentro de los tres días a la provincia a una nueva elección para

llenar el período corriente, siempre que de éste falte cuanto menos un año y que la separación o impedimento del gobernador y vicegobernador fuesen absolutos. En el caso de procederse a una nueva elección, no podrá recaer sobre el que ejerce el Poder Ejecutivo».

La palabra separación significa obviamente «separación legítima», que sólo puede tener lugar mediante el juicio político. En cuanto al impedimento, debe ser de carácter absoluto y permanente.

El doctor César Enrique Romero, al hacer el comentario del artículo 100 de la Constitución provincial y al considerar su aplicación en el caso concreto ocurrido en Córdoba a raíz del hecho sedicioso del mencionado Navarro, declaró lo siguiente: «El artículo 100 prevé la separación e impedimento jurídico simultáneo del gobernador y vicegobernador de la provincia. Pero en este caso nos hallamos ante un acto de abierta sedición en los términos del artículo 6º de la Constitución Nacional, segunda parte. No habría dudas sobre la asunción del gobierno provincial por parte del presidente de la Cámara de Diputados si el gobernador y el vicegobernador hubieran renunciado a sus cargos, situación que, como es obvio, no existe, ya que están detenidos por orden de quien encabezó el acto de sedición. En consecuencia se aplicaría la vigencia del artículo 100, a los efectos de que se tomen las medidas pertinentes para la liberación de los mandatarios detenidos y la reasunción de sus funciones, o, en todo caso, para que el gobernador interino como autoridad constituida requiera la intervención federal para que se sostenga o se restablezca a los funcionarios depuestos por la sedición. No mediando los supuestos de renunciación o impedimento absoluto —agrega— no asumiría vigencia la posibilidad de la convocatoria a elecciones y la situación quedaría en la hipótesis del artículo 6º de la Constitución Nacional, es decir, la intervención ejecutiva del gobierno federal, que por razones de urgencia la puede decidir el presidente de la Nación dando luego cuenta al Congreso».

De lo expuesto en este apartado, cabe extraer las siguientes conclusiones: a) la asunción del presidente de la Cámara de Diputados sólo se justificaría para reponer en sus cargos al gobernador y vicegobernador; b) es nula de nulidad absoluta la convocatoria a elecciones que el doctor Agodino efectuara al asumir el cargo; c) por ello también es irrelevante el juramento prestado por ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia como gobernador, dentro de los términos del artículo 100, pues el doctor Agodino es sólo el presidente de la Cámara de Diputados, a cargo provisionalmente del Poder Ejecutivo provincial. Además, no se llenaron todos los requisitos que prescribe la mencionada norma constitucional.

VII. Intervención del juez federal.

Producido el hecho sedicioso, el procurador del tesoro de la provincia formuló la denuncia co-

respondiente ante el juez federal de turno, doctor Zamboni Ledesma. Si bien la justicia federal es de excepción y su competencia deriva de los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional, conviene al respecto recordar el artículo 231 del Código Penal, que dice: «Luego que se manifieste la rebelión o sedición, la autoridad nacional más próxima intimará hasta dos veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan o retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello.

»Si los sublevados no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos. No serán necesarias, respectivamente, la primera y segunda intimación, desde que los sublevados hicieren uso de las armas.»

La expresión «autoridad nacional», contenida en el artículo 231, se debe interpretar en sentido amplio, ya que el hecho sedicioso puede crear situaciones de fuerza a la autoridad provincial que se encuentre enervada e impedida de actuar. De tal manera, el juez federal citado como «autoridad nacional más próxima» actuó en consonancia con las normas legales, en vigencia, sin que los sediciosos depusieran su actitud.

En virtud de estos hechos y por las razones expuestas, cabe afirmar: a) la crisis institucional de Córdoba no es sino el producto del acto sedicioso perpetrado por el ex jefe de policía de la provincia, teniente coronel (RE) Navarro; b) el mencionado militar, además de los delitos comunes que se le imputan en la requisitoria formulada por el señor agente fiscal del noveno turno, aparece en estas circunstancias como autor de los delitos de usurpación de cargo, sedición, privación ilegítima de la libertad, incitación a la violencia, desacato, atentado y resistencia contra la autoridad (artículos 141, 142, 149 bis, 229 y sucesivos, 237, 244 y 246 del Código Penal y disposiciones conexas); c) la actuación del gobierno nacional debió encuadrarse dentro de los términos del artículo 6º, segunda parte, de la Constitución Nacional. En consecuencia, debió enviar inmediatamente las fuerzas necesarias para disponer la reposición en sus cargos de las autoridades legítimamente constituidas; d) la asunción del presidente de la Honorable Cámara de Diputados sólo se justificaría si repusiera en sus cargos a los mandatarios destituidos por la sedición, requiriendo para ello el auxilio pertinente de las fuerzas federales; e) el presidente de la Cámara de Diputados en ningún momento debió ser investido por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia como gobernador de ella, sino que debió asumir la titularidad provisional del Poder Ejecutivo provincial a los efectos del punto anterior y a fin de restablecer la normalidad institucional de la provincia; y, f) la intervención federal que propicia el gobierno nacional por ante el Honorable Congreso de la Nación, sólo se justificaría si ella tuviera por objeto reponer en sus cargos a las legítimas autoridades constituidas, de acuerdo con el ar-

título 6º mencionado, restableciendo el orden subvertido en la provincia e iniciando proceso a todos los que de un modo u otro han alentado la sedición, han participado en ella o la han encubierto.

La gravedad de los sucesos ocurridos en Córdoba, en virtud de esta acción sediciosa a que he hecho referencia, es decir, la acción del jefe de Policía que se alza contra el poder legítimo, al que desconoce y encarcela, constituye un baldón para la conducta e historia política de mi provincia, que ha cimentado el prestigio del civismo y la cultura de la República a lo largo de su existencia.

Este es el punto de partida de una gran crisis moral y política para Córdoba, agravada por el desenfreno de la fuerza y las especulaciones, que parecen, a la luz de las soluciones propuestas, más importantes que las instituciones y la defensa de la autonomía provincial.

Nada puede ser más importante que la defensa del mandato popular; y la deposición de la más alta autoridad provincial, desconocida por la sedición dentro de un proceso de subversión, está dirigida a sabotear el orden institucional.

Si grave resulta el desconocimiento de la Constitución, del mandato popular y del orden jurídico, no menos grave es la instrumentación de ese desconocimiento mediante la presencia de personas fuertemente armadas, con una autoridad rayana en el atropello, frente a una ciudadanía indefensa y amenazada.

Cabría preguntarse: ¿quién los ha investido de tan grande autoridad y quién ha suministrado las armas?; ¿a quién obedecen?; ¿cuál es el objetivo último que persiguen?

«La Voz del Interior» —ese prestigioso diario de mi provincia que en estos últimos días ha sufrido dos atentados, señor presidente, por no acallar su verdad— ha dicho: «La atmósfera de intimidación ha crecido en pocas horas por la acción de constantes tiroteos entre antagonistas no identificados que se mueven todavía en la sombra, y que han coincidido en provocar un estado de pánico generalizado, pues en situaciones como ésta nadie está completamente a salvo de ser víctima inocente de las balas de cazadores furtivos de vidas humanas, o de bandas armadas que se entrenan como fuerza de choque. ¿Es que se ha querido fomentar la formación de un estado de emergencia, que exhiba a la provincia y sobre todo a la capital, abandonada a su suerte, con nocturnal empleo de la metralla homicida para justificar la aplicación de remedios de excepción y humillar a un pueblo orgulloso de sus tradiciones democráticas? Si ése ha sido el objetivo, la triste realidad de semejante comportamiento es enorme ante el presente y el futuro, porque no se lesiona gratuitamente el patrimonio civil de una comunidad: tarde o temprano los agresores pasan a la condición de agredidos».

La Unión Cívica Radical estuvo vigilante y fue actora en el proceso, y es tal el respeto que guardamos por las instituciones, que al instante del hecho sedicioso denunciarnos, con otros legisladores nacionales, la gravedad de los acontecimientos ante el ministro del Interior. Nuestra voz resonó en el país diciendo que Córdoba había sido utilizada como el escenario de un hecho insólito que se concretaba en la sedición de los grupos policiales provocando la detención de los más altos funcionarios de la provincia, muertes y destrucción de bienes, violación de fueros parlamentarios, actos de terrorismo que atentaban contra la prensa y constitución de grupos armados civiles.

Dijimos que estos episodios no son fruto de un proceso aislado ni de generación espontánea; responden en mi provincia al desencuentro ideológico del oficialismo y a las luchas intestinas que se advierten en su seno. Pero cuando puntualizamos estas desviaciones, en manera alguna pretendemos justificar con ellas las acciones de fuerza que configuran la sedición penada por la ley, por cuanto ella merece el repudio de la ciudadanía, ya que nadie tiene el derecho de alzarse contra las autoridades constituidas por la voluntad soberana del pueblo.

La falta de autoridad de los gobernantes, sus parcialidades e ineptitudes, tienen el recinto jurídico y político y la oportunidad adecuada para ser juzgadas por los representantes populares. Las actitudes de fuerza, ayer como hoy, importan la negación del orden constitucional, lo que debe y tiene que ser castigado. Nuestras afirmaciones no implican compartir ni avalar los errores o desaciertos del elenco gobernante, ni tomar partido en las luchas internas del oficialismo de Córdoba, que debe comprender el papel que le corresponde en una provincia que desea vivir y desarrollarse en paz y seguridad para servicio del país y no de una facción.

Los sucesos de Córdoba, cualquiera sea el cristal con que se los mire, reclaman una reparación integral. El avasallamiento de las instituciones y, sobre todo, la defraudación a la confianza popular depositada en las instituciones recuperadas después de la noche larga de siete años militares bajo cadena y sangre no pueden ser admitidos. No pueden mancillarse la confianza y la seguridad en las instituciones, que son el basamento imprescindible para un proceso de liberación. Lo contrario, señor presidente, a mi modesto entender, es continuismo, es remedo de, democracia.

Esta postura de la Unión Cívica Radical no es aislada. Es la interpretación de un sentir que estimamos comparte la mayoría del pueblo, y así lo expresan sus representantes. Lo dice el Partido Revolucionario Cristiano al exigir al gobierno nacional la adopción de medidas que permitan restablecer el orden constitucional devolviendo el gobierno a sus legítimas autoridades. Lo piden el Frente de Izquierda Popular,

adherente del justicialismo en los últimos comicios, el Partido Socialista de los Trabajadores, los socialistas democráticos, el Movimiento de Acción y Renovación del Partido Demócrata de Córdoba, la Regional Córdoba del Peronismo de Base «17 de Octubre», el Partido Socialista Popular, el MID y el Partido Intransigente. No sólo lo solicitan las fuerzas políticas, sino también las agremiaciones profesionales, como el Colegio Médico de la ciudad de Córdoba, la Federación Médica Gremial de la provincia de Córdoba, la Agrupación de Abogados de Córdoba, el Movimiento de Acción Forense y la Federación de Asociaciones Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba.

Esta vigorosa expresión de las fuerzas políticas y de los representantes profesionales coincide con la afirmación y definición del sector legalista de las 62 Organizaciones de Córdoba, integrado por los gremios de la alimentación, papeleros, panaderos, gastronómicos, aguas gaseosas, trabajadores del Estado, mineros, tranviarios, entidades deportivas y civiles, empleados públicos, mozos de cordel, farmacia, plásticos, viales, petroleros del Estado, Obras Sanitarias, pasteleros, telegrafistas y afines, casas de renta, fósforo, cueros, barraqueros, jaboneros, televisión y tabaco. Este sector, en una pública declaración, dijo que «la sedición policial perseguía como objetivo evidente, además del ataque al gobierno popular de Córdoba, otro como el de ensayar un modo de acción que, en última instancia, será ejercida contra el propio teniente general Perón».

Se alzan también las voces de SMATA, Luz y Fuerza, de AATRA, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, del Sindicato de Trabajadores de Motores Diésel y Livianos de Perkins y de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, regional Córdoba.

He debido, señores legisladores, referir estas expresiones con el fin de que el Honorable Senado tome conciencia cabal de los antecedentes y sepa qué fuerzas son las que reclaman el respeto a la voluntad popular y al orden institucional. «La alteración de las estructuras sociopolíticas de la provincia constituye un desgarramiento en el alma de la República. La paz cordobesa, pues, será la paz argentina. Si Córdoba se rebela contra sí misma, es decir, contra su mundo espiritual interno por el odio y la lucha entre hermanos, la República, con todos sus Estados, perderá también su paz, su visión política y social», como lo ha expresado el diario «Córdoba» de mi provincia.

El Senado de la Nación tiene hoy una responsabilidad histórica en cuanto al futuro de las instituciones. Debe demostrar el valor y la comprensión del poder civil, para aventar definitivamente las añoranzas de golpes de Estado. Debe ratificar su devoción por la ley y su decisión de

afirmar que quien la violente será pasible del rigor del Código Penal. Lo contrario será abrir la puerta a la aventura, a la trasnochada conducta de la violencia, que yo personalmente rechazo con todas mis fuerzas, señor presidente.

En otro orden, como cordobés, no puedo ocultar el amargo dolor que me produce la interpretación histórica sobre Córdoba que contiene el mensaje adjunto al decreto 686, referido a la situación institucional de mi provincia. Me referiré tan sólo a algunos aspectos de ella. Se dice en el mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso que Córdoba significó para el país un centro de equilibrio a veces, y lo contrario generalmente. Tal vez el redactor del proyecto no sólo ignore la historia de Córdoba sino acaso no conozca ni el territorio de la provincia.

Dice Emilio Rojas que la misión histórica de Córdoba en el ámbito de nuestra Nación ha consistido y consiste en mantener y acrecentar, por medio de la acción política, la vieja y siempre renovada aspiración del interior argentino, no tanto en el sentido de afianzar una forma de gobierno que todos compartimos, sino de mantener encendida la llamarada de la democracia federalista concebida como algo substancial o espiritual, animando a todo el cuerpo social y que obliga al respeto de la personalidad humana, a un estilo de vida, a una manera de ser dentro del clima moral de la libertad.

Los caudillos de las provincias y las huestes que los seguían sentían todo esto sin saber definirlo. Lo sentían y por ello peleaban. Pero la vigencia de la democracia pierde todo sentido si el pueblo sigue ahogado por la miseria y no existen las posibilidades de una seguridad para la subsistencia, la salud, el trabajo estable y el acceso a las fuentes de una auténtica cultura.

En el andar futuro de Córdoba estas aspiraciones son aspectos fundamentales de ese anhelo de la democracia federalista de la que Córdoba fue intérprete e insigne paladín en todos los momentos cruciales de la historia patria.

El concepto de democracia está fundado en ideas inculcadas en la universidad, en la aspiración de liberarnos del dominio español. Pero esta idea de democracia tiene un giro distinto en cada región del país, y, como dice Ricardo Levene, «surge del choque entre la democracia individualista, enciclopedista y protestante del puerto y la democracia social, teológica y católica de Córdoba»; o como dice Martínez Paz, «entre la federación del interior y el centralismo del puerto que proclama una jerarquía institucional y aspira a organizar el país bajo su predominio».

Esto no sólo es verdad histórica, es llave de interpretación de nuestros procesos.

En el punto 3º el Poder Ejecutivo alude a la reforma de 1918 como ideario romántico y «teñido de barroquismo intelectual».

No interpretaba cabalmente el sentido y acudí a la definición que da el diccionario de la Aca-

demia Española, señor presidente. En cualquiera de sus acepciones el término «barroquismo» está conceptualmente mal empleado. Una primera acepción es la tendencia a lo barroco, es decir, a un estilo artístico caracterizado por la profusión de adornos, en contraposición al Renacimiento clásico. Y «barroquismo intelectual» hace referencia a frases ampulosas sin contenido ni substancia. Una segunda acepción, también consignada por la Academia, indica que «barroquismo» es un galicismo sinónimo de extravagancia.

Esta forma despectiva de aludir a la reforma universitaria de 1918 revela la mentalidad colonial del redactor del proyecto elevado al Congreso para considerar la situación institucional de Córdoba.

En el punto 4º del mensaje se evidencia esa misma mentalidad conservadora al afirmarse que el movimiento universitario de 1932 «replantea, a la luz de problemas sociales y de la lucha contra la dependencia, la problemática nacional», agregando a continuación su juicio sobre esa postura, diciendo: «continúa, visto y analizado el proceso desde nuestra perspectiva temporal, la confusión ideológica y la indefinición programática».

Discrepo rotundamente con esta aseveración por las siguientes razones: a) la reforma universitaria no tuvo el significado de una reforma de estatutos. El movimiento universitario de 1932 sostuvo que la universidad debía irradiarse hacia el pueblo, no sólo por la rebaja de aranceles, por los cursos de divulgación popular, etcétera, sino por el contenido de esa cultura universitaria, que debía ser más dirigida hacia los problemas sociales. Aludió el movimiento de 1932 a la misión pedagógica y moral de la universidad, a su fin último, expresando que ésta debía educar a la totalidad de los valores humanos como una superación del positivismo de la universidad anterior a 1918, que trató de reducir esos valores a los meramente económicos. La universidad, se sostenía, debe ser más social más humanista, más atenta a la totalidad de los valores éticos, espirituales y estéticos referidos al ser nacional y a la inquietud de captar los valores eternos de la humanidad de la que nuestra sociedad forma parte; b) el mensaje del Poder Ejecutivo, en el punto 4º, que hace referencia a la postura de plantear la problemática nacional a la luz de los problemas sociales y de la lucha contra la dependencia colonizante, la califica como confusión ideológica e indefinición programática.

Esta postura que se califica como confusa e indefinida fue tomada del ideario del radicalismo y hoy sigue siendo la gran bandera de nuestro partido, porque ella es una doctrina política que nos obliga a ser solidarios con las aspiraciones populares referidas a la autodeterminación o liberación económica nacional de otros entes financieros o económicos exteriores, finalidad ésta que procura que la Argentina

sacuda la dependencia de potencias imperiales que suplantaron al mundo hispánico y que seguirán, como hasta hoy, oponiéndose a la realización del destino nacional.

Señor presidente: el país reclama esfuerzo, comprensión y paciencia para desarrollar su potencialidad demorada, pero por sobre todo reclama grandeza en los procedimientos para que no se mancille el juego libre y respetado de las instituciones, para que sea cierto el federalismo, la autonomía de las provincias y el derecho de los pueblos a elegir sus propios gobernantes.

Señores senadores: la intervención federal a una provincia argentina, aunque se disponga sólo con respecto a uno de sus poderes, es siempre una medida constitucional de excepción.

En el clásico *Manual* de Joaquín V. González se lee: «Aunque la Constitución ha establecido una separación bien clara entre las soberanías nacional y provincial, la necesidad de proveer a los medios positivos de realizar la unión, alcanzar la justicia, consolidar la paz interior y proveer a la defensa común, ha hecho indispensable un sistema de excepciones a aquella regla de la dualidad y mutua dependencia en el ejercicio de sus respectivos poderes».

Juzgada la situación planteada en Córdoba, desde el punto de vista del «realismo jurídico» al que se refiere el constitucionalista César Enrique Romero en sus obras *Introducción al derecho constitucional* y *Tendencias actuales del constitucionalismo*, es incuestionable que el poder central ha debido intervenir en la provincia en los términos del artículo 6º de la Constitución Nacional.

A juicio del mencionado jurista, la medida adecuada hubiera sido una intervención federal ejecutiva, acorde con la segunda parte de dicho artículo. Coincide así el doctor Romero con lo expresado en el telegrama que los legisladores nacionales por Córdoba dirigimos el 28 de febrero al señor ministro del Interior.

Se estaba, sin duda alguna, frente a un típico acto de sedición, como creo haberlo demostrado, y el Poder Ejecutivo nacional, suficientemente informado de ello, tenía el deber de concurrir con su intervención para restablecer a las autoridades destituidas, de acuerdo con la norma constitucional ya invocada.

Aunque no hubiera existido requisición de los gobernantes depuestos, ella debió considerarse tácita, debido a la imposibilidad fáctica de formularla en que se hallaban tanto el gobernador como el vicegobernador de la provincia. La asunción del gobierno por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Córdoba fue un acto apresurado, porque ni el gobernador ni el vicegobernador habían renunciado. Además, fue inconsulta la convocatoria a elecciones, porque en ese momento no se daba el supuesto del artículo 100 de la Constitución provincial.

La libertad del gobernador Obregón Cano y su decisión de no renunciar comportaron en Córdoba, a partir del día 2 del mes en curso, la existencia de dos gobiernos: el elegido por el pueblo a principios de 1973 y el asumido por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados con la anuencia del Superior Tribunal de Justicia, que omitió fijar el alcance del mandato interino; pero lo cierto es que seguía detentando el poder el ex jefe de policía sedicioso, quien, inclusive, desobedeció una decisión de la justicia federal.

Esos hechos, y especialmente la existencia de poderes no previstos en la Constitución, alteraron la forma de gobierno republicana que el gobierno federal debe garantizar a cada provincia en virtud del artículo 59 de la Constitución Nacional. Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sido lamentablemente remiso en acudir a cumplir su obligación constitucional de restablecer a las autoridades depuestas por la sedición.

Sobre la intervención ejecutiva, cuyo objeto es reponer a las autoridades depuestas, dijo Magnasco desde su banca de diputado nacional el 23 de octubre de 1892 que el gobierno federal «debe ir a ojos cerrados, en cumplimiento del mandato constitucional, a reponer la autoridad derrocada».

Por último, señor presidente, sintetizando esta exposición, puntualizaré las razones a las cuales obedece mi oposición al proyecto de intervención enviado por el Poder Ejecutivo: primero, la intervención que se propone lesionaría innecesaria e injustificadamente la autonomía de la provincia de Córdoba; segundo, con esa medida se aceptaría, de hecho, el fin perseguido por la sedición, que consistió en deponer a las autoridades constituidas; tercero, al no restablecer a dichas autoridades, se desconocería la voluntad mayoritaria del pueblo de Córdoba expresada en los últimos comicios; cuarto, el gobierno federal omitiría el cumplimiento de su deber constitucional de reponer a las autoridades legítimas depuestas por un acto de sedición; quinto, una intervención no contribuiría al logro de la pacificación, que es preciso alcanzar sin tardanza, porque comenzaría por herir el honroso espíritu federalista de la ciudadanía cordobesa.

Todas estas afirmaciones, señor presidente, no son la justificación del proceder, del modo de obrar, de la conducta, de los aciertos o de los errores del gobernador y vicegobernador. Nuestra actitud es en defensa de las instituciones y la única alternativa, al decir de Ricardo Balbín, es reponer a las autoridades legítimamente constituidas en la provincia y luego el partido oficialista debe solucionar su pleito interno.

Señor presidente: los actos del gobierno federal semejantes a la intervención que ahora propone el Poder Ejecutivo son, a mi entender, absolutamente inconciliables con el designio proclamado de favorecer el robustecimiento del federalismo y de afianzar las autonomías pro-

vinciales. Afirmo que con actos de esta naturaleza se menoscaba la normalidad institucional, a cuya definitiva consolidación tiene derecho la ciudadanía democrática de la República y a la cual estamos obligados todos los que recibimos mandato popular en marzo de 1973 (*¡Muy bien! Aplausos. Varios señores senadores felicitan al orador*).

Sr. Cerro. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Cerro. — Señor presidente, señores senadores: la Comisión de Asuntos Constitucionales y Administrativos ha producido dictamen sobre este trascendental tema que nos preocupa: la situación institucional de la provincia de Córdoba. Ese dictamen en mayoría lleva la firma de tres de los cinco miembros de la comisión. El señor senador de la Rúa y quien habla hemos producido sendos dictámenes en disidencia. Nos corresponde, pues, informar el despacho que hemos suscrito.

Esta noche íbamos a debatir la ley universitaria. La urgencia del drama cordobés nos exige posponer ese debate, en el que las coincidencias eran muchas más que las discrepancias, merced a un trabajo de colaboración entre el bloque de la mayoría y las minorías representadas en este cuerpo.

Nuestro bloque ha mantenido a lo largo de su actuación parlamentaria —lo hemos recalcado muchas veces en este recinto— una actitud de colaboración en la tarea de gobierno. Cuando tuvimos que disentir lo hemos hecho siempre en ese plano de cordialidad, sin ofensas ni agravios. Pero disentir a conciencia es trabajar para el país, no para un sector. Lo que digamos esta noche debe ser así entendido. No buscamos sacar ventajas partidarias o políticas sectorizadas. Se trata de algo mucho más importante: de asumir con responsabilidad el cargo que nos confió el pueblo a través de las urnas para resolver un problema de enorme trascendencia y gravedad.

Estamos ante un hecho político difícil. Podemos acertar en las soluciones o podemos errar. No nos creemos dueños absolutos de la verdad. Hemos firmado un despacho en disidencia convencidos de encontrar, a través del mismo, la solución buscada que concilie el hecho jurídico con el hecho político.

Nuestra responsabilidad es grande y admitimos la posibilidad de errar. Pero pensamos, primero, que debemos defender el gobierno civil y la capacidad de los civiles para gobernar, que es lo mismo que reivindicar la política y a los políticos, lo cual creemos que es un deber de la hora; segundo, que debemos respetar la vigencia de la Constitución Nacional y las leyes, pues, como bien lo dice Alberdi, arrodillarse ante la ley es la única manera de no arrodillarse ante los tiranos; tercero, que debemos repudiar la violencia como lo han hecho unánimemente todos los blo-

ques aquí representados y proclamar la posibilidad de una revolución en paz y libertad; cuarto, que es un deber de este cuerpo repudiar los cuartelazos, mucho más cuando este cuartelazo es realizado por el cuerpo de policía que tiene a su cargo la responsabilidad de la custodia, la seguridad de los bienes, de las personas y del orden público.

Si creemos que debemos defender esos principios y jugarnos por los mismos, no dudemos y expresemos en este recinto nuestro más absoluto repudio a la actitud asumida por el jefe de Policía y las fuerzas policiales de la capital cordobesa, que han sentado un precedente funesto en este período preñado de esperanzas en el que buscamos la institucionalización civil del país y la liberación de la República.

Muchas veces en el quehacer parlamentario hemos emitido opiniones personales. En este caso manifestamos no solamente la opinión personal, sino también un expreso mandato partidario. El señor senador preopinante recordó la declaración del Partido Revolucionario Cristiano. Nuestra junta nacional ha dicho que el episodio de Córdoba constituye un serio retroceso para el proceso institucional abierto en la República; que acontecimientos como éste deterioran aceleradamente el clima de convivencia democrática del país, por lo cual urge al gobierno y a las fuerzas políticas nacionales y democráticas concertar una inmediata profundización de la política de unión nacional. El inmediato remedio a Córdoba debe serlo dentro del marco de respeto a las autoridades elegidas por el pueblo y al régimen federal de gobierno. En el mismo sentido se pronuncia la junta provincial del Partido Revolucionario Cristiano de Córdoba.

En este tema de la intervención federal se han escuchado ya discursos brillantes y exhaustivos, orientados hacia la interpretación de los artículos 59 y 69 de nuestra Constitución, por lo cual no vamos a incursionar en profundidad al respecto.

También se ha expresado con claridad el senador cordobés, doctor Angeloz. Pero es menester recalcar que la jurisprudencia parlamentaria sobre este asunto es en general lamentable. Hay precedentes para todos los casos, y por eso a este cuerpo, que ha dado brillantes muestras de sensatez y madurez política, le corresponde reaccionar contra esos antecedentes. Debemos pensar que hay provincias que en este siglo han vivido más tiempo bajo intervenciones federales que con gobiernos elegidos legítimamente por la voluntad popular. Cabe recordar con tristeza, y no con orgullo, que mi provincia, Santiago del Estero, fue un ejemplo cabal de esa práctica, y que sólo tres gobernadores terminaron su período durante el siglo XX.

Hay coincidencias en esta apreciación. El doctor Segundo V. Linares Quintana nos dice que la práctica del artículo 69 de la Constitución

revela que la mayoría de las veces en que el poder central puso en movimiento el extraordinario mecanismo de la intervención federal en las provincias, no se ajustó ni a la letra ni al espíritu del precepto, que fue incluido en el código político de la Nación, en defensa y no en detrimento de la autonomía local. González Calderón y casi todos los constitucionalistas opinan en el mismo sentido.

Es cierto que el mismo autor habla de la intervención federal como de un remedio extraordinario. Otros hablan de «medidas extraordinarias». El doctor Rivarola, en una metáfora analógica con la medicina, nos dice que es la operación que el gobierno federal ejecuta para extirpar un mal que perturba la vida constitucional de la Nación por mal funcionamiento del órgano gobierno-provincia. Su eficacia —dice— depende, como en la cirugía, de dos circunstancias: el acierto en el diagnóstico, que corresponde al Congreso de la Nación, y la habilidad del cirujano, que corresponde al presidente de la Nación.

Nosotros creemos que la intervención federal es una institución jurídica y política, y ello ha quedado de manifiesto en la discusión en comisión, que, como bien señaló el miembro informante de la mayoría, se desarrolló en tono cordial y respetuoso hacia las opiniones disidentes. Recalco lo de jurídica y política, porque quizá la posición adoptada por nuestro bloque en su informe pueda ser tachada de demasiado ceñida a lo jurídico y formal, olvidando el hecho político. Nuestro ánimo está lejos de esa interpretación. Nosotros consideramos que se trata de una institución a la vez jurídica y política, por la cual el gobierno federal, en tres situaciones que distingue el artículo 69, interviene en una provincia. Primero, para repeler invasiones exteriores, que no es el caso que estamos analizando. Segundo, para garantizar la forma republicana de gobierno cuando ha sido subvertida, en cuyo caso se substituye a la autoridad provincial. Tercero, a requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o restituir las si hubieran sido depuestas por la sedición o la invasión de otra provincia.

No es nuestra posición una muestra de ingenuidad política o de expresión simplemente teórica. Exigir el cumplimiento de la Constitución no es un hecho teórico. Ojalá en todos los momentos de la vida los funcionarios hicieran un deber de conciencia de cumplir con la Constitución y las leyes. Entonces, eso que parece teórico o doctrinario se traduciría en los hechos reales.

No estamos olvidando el hecho grave de la situación fáctica que puede ocurrir en la provincia ante grupos armados, como refieren las noticias periodísticas y como se ha expuesto en el informe con que el Poder Ejecutivo acompaña este proyecto.

Comprendemos el hecho político pero estamos convencidos de que la solución debe intentarse dentro de los mecanismos constitucionales que fija el artículo 69, restableciendo a las autoridades constituidas.

No queremos avalar un precedente que será funesto. No se trata de defender a la persona del doctor Obregón Cano o del gremialista Atilio López, o su actuación como gobernantes. Creo que está fuera de tema el juicio que pueda merecer su gestión política. Ocurre, simplemente, que no podemos legalizar la sedición. Esa es la cuestión fundamental que hoy día nos trae a consideración este asunto.

No se nos escapa que en el mensaje del Poder Ejecutivo, al cual ya se refirió extensamente el senador Angeloz, se hacen una serie de consideraciones histórico-políticas que pueden servir para el debate y en las cuales no me detendré. Un matutino local ha calificado la redacción de antológica, de pluma absolutamente indescifrable, y categóricamente afirma que no es el estilo del presidente Perón, cuestión que compartimos, y que pertenece a otra pluma y otro estilo la parte resolutive del proyecto, en la que el lenguaje efectivamente es diferente. Pero más allá de ello hay un hecho de sedición que ha reconocido caballerescamente el senador Fonrouge y que el senador Angeloz ha detallado; por ello y en honor a la brevedad, vamos a recalcar simplemente algunas situaciones.

En primer lugar, que la provincia de Córdoba vive una situación institucional sin precedentes en su historia; por lo menos no recordamos otro caso, pese a que hemos citado que la jurisprudencia parlamentaria en este tema es bastante lamentable.

La sedición del jefe de Policía ha culminado con la detención del gobernador, vicegobernador, ministros, funcionarios, legisladores y ciudadanos, violando toda clase de fueros e inmunidades y todo tipo de garantías individuales.

La provincia de Córdoba ha estado más de veinticuatro horas sin gobierno alguno, merced a la discreción de un funcionario rebelde.

La asunción de la gobernación por parte del presidente de la Cámara de Diputados, que paradójicamente jura en presencia del jefe de Policía rebelde, invocando el artículo 100 de la Constitución Provincial, es claramente una solución transitoria que nunca puede ser convalidada.

Se han cometido gravísimos delitos federales. Ya en este recinto se los ha detallado, y al respecto cabría recordar a título informativo la sedición, obstrucción a los servicios públicos de transporte, tomas de medios de comunicación, privación ilegítima calificada de la libertad, asociación ilícita calificada, instigación a la sedición y otros. A ellos siguieron las tomas de las radioemisoras. Por último, el agente fiscal en turno ha promovido acción penal por ante el Juzgado de Instrucción de Novena Nominación

de la ciudad de Córdoba, contra el jefe de Policía sedicioso, por graves delitos comunes. El Poder Legislativo no ha podido reunirse y las autoridades constituidas —o sea el gobernador y el vicegobernador— han solicitado la intervención de las autoridades nacionales.

No entraremos al debate jurídico formal. No vamos a referirnos a la forma en que nacieron históricamente los artículos 5 y 6, que tuvieron una redacción en el proyecto de Alberdi, otra más o menos semejante en el texto de la Constitución del 53, la que fuera modificada en 1860. Lo que sí se puede recalcar es que en todo ello hubo un gran celo por la finalidad que se perseguía con esos textos, es decir que la intervención federal fuera un instituto para defender el régimen federal y la autonomía provincial. ¡Am-ha cosas!

Si bien la intervención es una facultad dada al gobierno federal, tiene un límite. Su uso lleva como fin la defensa de la autonomía provincial y del régimen federal.

Tampoco se discute que la expresión «gobierno federal» en el artículo 69 significa el Congreso de la Nación, y esto lo reconoce, y es loable ponerlo de resalto, el Poder Ejecutivo nacional al enviar el proyecto a este Honorable Senado.

El inciso 28 del artículo 67 dice claramente que corresponde al Congreso de la Nación dictar todas las leyes y reglamentos para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la Constitución al gobierno de la Nación Argentina. Pero también es cierto que en este caso, si el Poder Ejecutivo hubiera actuado de inmediato, al efecto de sostener o restablecer las autoridades que por impedimentos de facto no podían formular el requerimiento de que habla el artículo 69, no hubiera invadido atribuciones del Congreso.

También creemos que es claro que las palabras «autoridades constituidas» no pueden entenderse referida al cargo que detenta en este momento el doctor Agodino, sino que son las elegidas por el pueblo, o sea los señores gobernador y vicegobernador. Creo que no cabe entrar en el detalle. Lo fundamental es el hecho político. Por ello, ante este hecho político de una sedición, de un cuartelazo hecho por un funcionario policial acompañado de una fuerza policial, creemos secundaria toda otra consideración y entendemos que lo fundamental es el respaldo moral que este Congreso de la Nación tiene que dar. Más allá de las calidades personales de los señores Obregón Cano y Atilio López, que no entro a juzgar, más allá de la situación en que se encuentra la provincia de Córdoba hoy, a consecuencia del hecho sedicioso, más allá de todo ello tenemos que condenar en este recinto a la sedición y dar el ejemplo moral al país, para bien de la democracia restaurada, de reponer a las autoridades constituidas o legítimas.

En el artículo 39 de nuestro proyecto pedimos también la constitución de una comisión bica-

meral formada por tres senadores y tres diputados. Creemos necesaria una investigación exhaustiva de los hechos, una evaluación realizada por esa comisión, para que luego de este primer paso que proponemos, restablecer a las autoridades constituidas, si los hechos posteriores demostraran que se necesita efectuar nuevos pasos —puede ser así o no—; con ese informe de la Comisión Bicameral este Honorable Senado, con los elementos de juicio en sus manos, pueda tomar una decisión.

Señor presidente, señores senadores: como ya lo hemos hecho con nuestra firma, adelantamos nuestro voto en contra del dictamen de la mayoría y el apoyo a nuestro despacho en disidencia. No volveremos a hacer uso de la palabra en el debate en particular. Queda sobreentendido que nuestra disidencia en general también lo es en particular con respecto a este proyecto.

Con estas breves palabras, dejamos informado nuestro dictamen, convencidos de que cumplimos con una obligación de conciencia y que es lo que corresponde para defensa de la autonomía provincial, del régimen federal y de la democracia argentina.

Nada más.

Sr. Mancini. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Mancini. — Señor presidente: la situación de crisis institucional que se ha producido en Córdoba como consecuencia del procedimiento y de la actitud del jefe de Policía de la provincia, teniente coronel Navarro, quien ha detenido al gobernador, al vicegobernador, a ministros, a algunos legisladores provinciales y a altos funcionarios, constituye un hecho de extrema gravedad que debió mover inmediatamente al gobierno nacional a poner en ejecución los recaudos que determina la Constitución Nacional en su artículo 69.

Esta medida tomada oportunamente, le hubiera evitado al pueblo de Córdoba vivir la angustia de llegar al borde de la guerra civil con enfrentamientos sangrientos y a encontrarse en estado de absoluta desprotección por que no están vigentes las autoridades naturales.

Haber dejado pasar el tiempo sin adoptar las medidas pertinentes significa para Córdoba pagar un alto tributo en vidas y en tranquilidad para dar solución a este conflicto. Córdoba está envuelta en un caos total como consecuencia de la actitud sediciosa del jefe de policía de la provincia, actitud que tiene la condenación pública y sobre la cual ha de pesar, con todo rigor, el castigo de la ley. Pero ante la situación convulsiva que vive la provincia y el alto grado de enfrentamiento a que se ha llegado entre los dos bandos en pugna —uno, que sostiene al gobernador, y otro que lo combate— considero que la solución no puede darse por el lado de la restitución de esas autoridades, sino que corres-

pondería la intervención federal al Poder Ejecutivo de la provincia.

Por estas razones dejo fundado mi voto positivo al proyecto de ley en discusión.

Nada más.

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Señor presidente, señores senadores: se considera el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo disponiendo la intervención federal a la provincia de Córdoba, a efectos de restablecer su forma republicana de gobierno. En el artículo 2º del proyecto se la limita al Poder Ejecutivo.

Declarar intervenida una provincia constituye un hecho de extraordinaria trascendencia, cuyas consecuencias, si no está motivado por circunstancias que real y efectivamente impidan otra solución, pueden resultar trágicas para el país.

En oportunidad de debatirse el proyecto de ley de intervención a la provincia de Formosa, proclamé, como hombre del interior y defensor del federalismo, mi repudio al avasallamiento de las autonomías provinciales. Sostuve, y lo afirmo enfáticamente, que la intervención federal es el remedio heroico al que se debe recurrir como un caso de excepción y cuando las instituciones locales han agotado los recursos para asegurar la forma republicana de gobierno.

La situación de Córdoba ha sido originada por un hecho sedicioso protagonizado por un jefe de Policía que, desconociendo el poder político y marginándose de la ley, privó de su libertad al gobernador y al vicegobernador juntamente con otros funcionarios.

Sin entrar a considerar si el Poder Ejecutivo cordobés ejercía su mandato en forma eficiente o no, si provocó, toleró, o fomentó situaciones conflictivas, si veló o no por salvaguardar el orden, la paz y la tranquilidad de la población, etcétera sostengo que ese Ejecutivo estaba integrado por dos ciudadanos que eligió el pueblo, y que esa voluntad popular expresada en el comicio debe ser respetada. Si son malos los gobernantes, se los releva mediante el juego normal de las instituciones locales; y si esas instituciones fallan y por ello peligra la forma republicana de gobierno, recién el poder central es el encargado de intervenir a los fines previstos en nuestra Carta Magna.

El movimiento sedicioso encabezado por el jefe de Policía reviste una gravedad tremenda por cuanto avasalla la soberanía popular y sienta un precedente que, de ser tolerado, abre el camino a la arbitrariedad y la anarquía. No interesa la persona de los gobernantes: interesa preservar las instituciones. Las instituciones, en el caso que nos ocupa, sólo pueden preservarse cumpliendo con lo que dispone el artículo 69 de la Constitución Nacional, es decir, intervenir en la provincia de Córdoba para restablecer las autoridades depuestas por la sedi-

ción. Si esas autoridades, una vez restablecidas en sus cargos, carecen de la idoneidad necesaria para su desempeño, son las leyes locales las que entrarán a jugar. Tales leyes determinarán, mediante su aplicación, si las autoridades restablecidas deben ser relevadas. Mientras tanto se habrá consagrado un principio que a toda costa debe permanecer incólume: el respeto a la soberanía popular.

Por lo tanto, opino que la ley que dispone la intervención a la provincia de Córdoba debe ser al solo objeto de restablecer las autoridades depuestas por la sedición, y al mismo tiempo ordenar que este cometido deberá cumplirse en un lapso no mayor de quince días.

Si bien aparecería como extraña al debate sobre la intervención federal a la provincia de Córdoba, hay una circunstancia que está vinculada expresamente a esta decisión: es el caso del jefe de Policía insubordinado. Noticias periodísticas dieron como cierta la denuncia formulada ante el juez federal de Córdoba contra el teniente coronel Navarro por un funcionario del gobierno provincial, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, sedición, etcétera. Las mismas noticias informaron que el juez había instruido el sumario y ordenado medidas. Pero el caso cierto y concreto es que el jefe de Policía sigue actuando sin cortapisas, y hasta ha sido confirmado por quien detenta la primera magistratura provincial.

Esta pasividad de las autoridades encargadas de aplicar la ley, ya que no otra cosa surge de lo que estamos palpando, me preocupa seriamente. En primer lugar, porque habría una total falta de apoyo a las decisiones judiciales que transforman a las mismas en meras declaraciones líricas y, en segundo término, porque este estado sirve para alentar movimientos de tipo sedicioso, cuya impunidad estamos apreciando.

Por ello, y como expresión de anhelos, dejo expuesta esta inquietud a fin de que las autoridades responsables llámense juez, policía o como se quiera, arbitren los recursos que las leyes que juraron cumplir y hacer cumplir han puesto en sus manos, para que hechos como el que nos ocupa, y que han sumido en el caos a toda una provincia, sean severamente reprimidos.

Nada más, señor presidente.

Sr. Jáuregui. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Jáuregui. — Señor presidente: el señor presidente de la Nación, en reiteradas oportunidades, ha reconocido la colaboración de las minorías, en pos de consolidar el orden institucional. Y en este debate, en forma coherente, vamos a seguir defendiendo esa postura y, en consecuencia, procederemos a votar en contra del equivocado trámite que el Poder Ejecutivo ha querido dar al problema institucional de la provincia de Córdoba.

Se hablaba de minorías, y no de oposición, porque el momento político que vive la Argentina está demostrando que los hombres que nos sentamos en este sector del Parlamento tal vez estamos actuando con una responsabilidad quizá mayor y más trascendente que la de los mismos hombres que actúan en el oficialismo.

Debo ser honesto, señor presidente, y decir que la situación de Córdoba no me sorprende, porque la heterogeneidad y las contradicciones del movimiento oficialista habían de producir estos hechos, pero sí debo declarar que me asombra el tratamiento que ha tenido este desencuentro. Sostengo, así mismo, que el Poder Ejecutivo ha procedido con una pereza sospechosa, porque debió actuar de inmediato, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Nacional, que le impone restablecer las autoridades depuestas por sedición.

Es más: numerosos sectores se dirigieron pidiendo que este artículo de la Constitución tuviera vigencia. Yo mismo lo hice 24 horas después de producido el hecho porque estaba convencido de que el Poder Ejecutivo sabría cumplir con la obligación constitucional.

Es tremendo lo que sucede en Córdoba. Hasta no hace mucho tiempo eran las fuerzas armadas quienes destituían a los gobiernos; ahora tenemos que un comisario se adjudica esa facultad para ejercerla en una provincia, y éste es el precedente que el Parlamento no puede aceptar, porque votar el despacho de la mayoría no sería más que convalidar y legalizar la sedición que va a substraer los ladrillos fundamentales del cimiento de las instituciones argentinas y de lo cual los primeros responsables son los sectores oficialistas.

Al informe del miembro de la mayoría lo califico de incompleto; parecería que la situación desgraciada de Córdoba se iniciara con la libertad de los gobernantes; en cambio, ella se arrastra desde tiempo atrás y en lo inmediato o se produce la eclosión con esa actitud inconsulta y tal vez sin precedentes del jefe de Policía, quien no parece tener limitaciones en sus atribuciones.

En Córdoba se desencadena una ola de violencia y el Poder Ejecutivo nacional tiene en sus manos los resortes para instaurar el orden y devolver su tranquilidad y paz a los cordobeses.

El remedio federal: parecería que el Poder Ejecutivo nos convocara a hacer la autopsia y no a curar una situación de deficiente salud civil de una provincia argentina. La tardanza en que incurrió el Poder Ejecutivo evidentemente no tiene otra intención que colocarnos ante un hecho consumado.

Señores senadores: creo que por encima de ello está el respeto, la obligación y la salvaguardia que nos dan la Constitución y las leyes para tranquilidad de todos los argentinos, cualquiera sea la ideología que profesemos.

Los diarios de Córdoba y de todo el país hablan de grupos civiles con brazaletes amarillos. Yo no quiero calificarlos de parapoliciales, pero no sé qué adjetivo se les puede adjudicar en este momento, ni sé a quiénes responden. Se está viviendo una situación política y social grave, pero que es tremenda en sus proyecciones porque esto puede repetirse en varias provincias que sabemos tienen conflictos latentes entre el gobernador y distintos sectores del oficialismo. Estamos actuando con total responsabilidad y con el mayor respeto a las instituciones argentinas. Por eso quiero advertir al gobierno que si da este paso va a sentar un precedente funesto que, indudablemente, no ayuda a la consolidación de la República.

Por eso, señor presidente, nuestro sector rechaza el despacho de la mayoría y va a adherir al despacho de la minoría que sostiene que, de acuerdo con la disposición del artículo 6º de la Constitución Nacional, el gobierno federal debe intervenir a la provincia de Córdoba al solo efecto de restablecer a las autoridades constituidas.

Sr. Culasso Mattei. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Culasso Mattei. — Grave es sin duda la situación institucional de la provincia de Córdoba.

Para llegar a la conclusión que fundamentará el voto de nuestro sector se hace necesario efectuar una cronología de los hechos.

En tal sentido, no es excepcional ni la forma ni la primera parte del desarrollo del proceso que hoy ocupa a esta Honorable Cámara.

Es obligatorio destacar, y de ello se han hecho eco en forma abrumadora los periódicos del país, que la crisis cordobesa se genera en un enfrentamiento dentro del sector mayoritario, es decir, el que detenta el poder político de la provincia. Pero si tal circunstancia puede suponerse normal y corriente en todo movimiento político, especialmente cuando el mismo se encuentra en el poder, no es menos cierto que las derivaciones que hoy motivan la sesión del cuerpo han llegado a extremos reñidos no sólo con la lógica, sino también que configuran un escándalo jurídico que hasta me animo a calificar como falto de ética.

Hasta hace pocos días había sí signos externos de una crisis de proporciones, pero que no iba más allá de conflictos gremiales, alteración en la prestación de servicios públicos, atentados, guerra de comunicados, etcétera.

La quiebra del orden constitucional cordobés comienza a producirse con la cesantía de un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo provincial. Creo conveniente subrayar que no es del caso juzgar el valor extrínseco del cargo detentado o de los títulos del funcionario de que se trata. Hablo objetivamente para decir con toda claridad que un ciudadano argentino, que de algún modo habrá jurado desempeñar fiel-

mente el cargo que se le encomendó, al dispónese su cese, se rebela contra la respectiva autoridad y comete el típico delito de sedición.

He ahí el primer paso que trae la zozobra al régimen de la provincia mediterránea. El segundo delito cometido podría servir de justificación y fundamento a algún mensaje sobre reformas del Código Penal, pues con la detención de las dos máximas autoridades provinciales se configura la privación ilegítima de libertad. Fácil parece para quienes se creen dueños de la custodia de vidas y haciendas en Córdoba, arrasar por la fuerza con la autoridad civil sustentada por miles de voluntades que así se expresaron en los comicios del año pasado. No nos interesa profundizar en las motivaciones que en definitiva colocaron al doctor Obregón Cano y al señor Atilio López en la gobernación y vicegobernación de la provincia que se proyecta intervenir.

Pero como celosos custodios de la Constitución y la ley, no podemos menos que señalar esto que al principio calificué como un verdadero escándalo jurídico.

Si a lo relatado, que determinaría ya con toda claridad cuál debía ser la actitud del gobierno nacional, se unen los posteriores pasos de este verdadero drama de las instituciones argentinas, fácil es admitir que el Poder Ejecutivo ha obrado, a mi entender, con error, con grave error.

Un interrogante se plantea: privados de la libertad el gobernador y vice de la provincia, nada se sabe del presidente provisional del Senado cordobés, que según el artículo 100 de la Constitución local debía hacerse cargo del poder de inmediato; la tierra parece haberse devorado a tan elevado dignatario político.

Sin tener respuesta a esta pregunta nos enteramos que asume la gobernación el presidente de la Cámara de Diputados de Córdoba. Nada se sabe tampoco de cuáles son las razones por las que este funcionario se presenta a prestar juramento de su pretendido cargo ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Sin desconocer desde luego la calidad de cabeza del Poder Judicial que tal tribunal inviste, no es menos cierto que el acto de asunción de gobernador debió estar precedido de su juramento ante la Asamblea Legislativa provincial.

Parece que debo fatigar a la Honorable Cámara con la continuidad de esta sucesión de hechos desgraciados, pues el mandatario que llega en la forma que he relatado anuncia de inmediato la convocatoria a elecciones, haciendo tabla rasa, y ya casi hemos perdido la cuenta de cuántas violaciones se han cometido contra el mismo artículo 100 de la Carta Magna cordobesa, ya que el convocante parece ignorar que la separación o impedimento del gobernador y vice no era ni es absoluta. No mediaba muerte, renuncia o destitución. Ambos mandatarios estaban detenidos por la fuerza de un ex funcionario dependiente del Poder Ejecutivo. Sin en-

trar en suposiciones, fácil es aceptar que el doctor Obregón Cano y el señor Atilio López no habían manifestado voluntad de resignar sus cargos; por el contrario, se conoce después un comunicado suscrito por el gobernador, mediante el cual, con toda claridad, expresa que no ha renunciado y que la situación por que atraviesa la provincia es un típico acto sedicioso, y en tal sedición se complicó también al flamante mandatario llegado a la casa de gobierno; quien en las últimas horas del domingo da a conocer un decreto por el cual se derogan aquellos otros que dispusieran la cesantía del jefe de Policía de la provincia. La medida lo restablece en el cargo, sosteniéndose entre otras consideraciones que «... la actitud del teniente coronel don Antonio Domingo Navarro es coherente con los objetivos y fines del actual gobierno...» Para mayor nitidez dice el nuevo decreto: «Ratificase la total confianza al señor teniente coronel don Antonio Domingo Navarro para el desempeño del cargo de jefe de Policía de la provincia».

Como cuadro general, el expuesto no puede ser peor, ya que el legislador que en forma tan menguada ha intentado asumir la gobernación es prisionero también, a mi juicio, del al parecer omnipotente ex jefe de Policía. Seguramente el legislador a que aludo piensa lo mismo y para aclarar su muy penosa situación da a conocer poco después del mediodía de hoy un comunicado oficial en el que expresa «... que todos sus actos de gobierno celebrados hasta la fecha cuentan con la conformidad y han merecido el aval del señor presidente de la República».

Me resisto, señor presidente, a creer tal temeridad, ya que el gobierno nacional no puede jamás prestar su conformidad a tamaña serie de atropellos al orden constitucional de un Estado argentino. Tal vez sí podría aceptarse que la información o la versión de los hechos no haya fluido hacia el gobierno nacional con toda la coherencia y claridad debidas. Para ello basta leer los fundamentos del decreto del Poder Ejecutivo nacional número 686, que, con una ampulosidad a mi entender desconocida, a la luz de mensajes sobre temas de importancia que ya ha tratado el Parlamento nacional, considera la situación cordobesa como un asunto que no ocurre en la República Argentina. Evito a esta Honorable Cámara por ser conocidos de todos los señores senadores, señalar lo que trasuntan las largas carillas dedicadas al tema, que finalizan con un decreto que encarga inocentemente al Congreso el tratamiento de «la situación institucional de la provincia de Córdoba».

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, senador Italo A. Luder.

Sr. Culasso Mattei. — No creo entrar en suposiciones alejadas de la realidad cuando destaco un cambio de actitud en el Poder Ejecutivo nacional al enviar a este cuerpo el mensaje 689. Si

en el anterior mensaje que he comentado se afirma que «... los elegidos, ya gobierno, no supieron colocarse a la altura de los deberes de su función...», en el nuevo mensaje que tengo sobre mi banca el gobierno reconoce que «... a partir del momento en que el gobernador doctor don Ricardo Obregón Cano y el señor vicegobernador don Atilio López recuperan su libertad de acción comienza a crearse un ambiente de tensa expectativa que es substituido paulatina pero planificadamente por movimientos de grupos sediciosos armados cuyo propósito ostensible es generar el caos».

Confieso, señor presidente, que la lectura del resto de estos pliegos llevaba sin ningún género de dudas a un proyecto muy diferente al que hoy considera el Honorable Senado. Coincido en que es deber del gobierno nacional restablecer la forma republicana de gobierno de la provincia de Córdoba. Así lo ordena al poder central el artículo 69 de la Constitución Nacional. Y no existirá ninguna interpretación deformada de la letra o el espíritu de esta norma constitucional que pretenda no ver configurada o concretada la requisición de las legítimas autoridades del estado provincial pidiendo al gobierno federal el auxilio de la fuerza para sofocar la sedición. De sedición se trata, señor presidente, pues si hay grupos armados en Córdoba parece que no todos responden a un plan de origen civil de lucha frontal contra las autoridades; los diarios han consignado que muchos de estos civiles llevaban un brazalete amarillo; otros no, y las fuerzas uniformadas, para completar el clima que justificaría cualquier atropello a las instituciones locales, aparecerían disparando sus armas desde uno u otro bando.

De allí, entonces, señor presidente, mi dolor de argentino que lee un proyecto de ley que completará la destrucción de un gobierno elegido por el pueblo.

Los demócratas progresistas, fieles a una conducta enmarcada en la Constitución y en la ley, decimos, compartiendo el pensamiento y el sentir de la mayoría de los argentinos, como ha expresado el señor senador Cerro, que es necesario inclinarse reverentes ante la ley para no tener que arrodillarse ante ningún despotismo. Así, rindiendo un culto consecuente a las normas claras de la Constitución y de la ley, serviremos al fin para el cual el pueblo nos dio su mandato.

Que cada cual asuma su responsabilidad, y subrayamos que la nuestra está al servicio de aquellos que más que ideales, son imperativos de todo argentino.

Por todo lo expuesto y por todo lo que se ha dicho en este recinto en el sentido que indico, el sector demócrata progresista votará en contra del proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

Sr. Poso. — Rido la palabra.

Sr. Presidente (Luder). — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

Sr. Posc. — Señor presidente, señores senadores: en este escabroso tema de Córdoba debo definirme y lo hago a título personal.

He defendido con todo fervor y entusiasmo las autonomías provinciales y el auténtico federalismo y lo he de seguir haciendo en todo momento y oportunidad.

Condeno y repudio la sedición de este señor jefe de Policía, quien, creyéndose dueño de vidas y haciendas, se constituye en el principal actor de un sainete trágico que conjura una sucesión de «payasadas», diría yo, que avergüenzan a la ciudadanía y también a mí como ciudadano argentino y como senador nacional.

Pienso también que, frente al hecho protagonizado por este funcionario policial que ha avasallado la soberanía provincial, ya ha pasado el momento oportuno para reponer a sus legítimos mandatarios. Las pasiones, los impulsos y las emociones han llegado a un estado de caos tal, que hacen imposible constituir el gobierno con sus auténticas autoridades.

Por estas razones, considero que en esta circunstancia la intervención a la provincia de Córdoba es un mal necesario pero oportuno, y en tal sentido daré mi voto positivo para la misma.

Nada más.

Sr. Pugliese. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Luder). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Pugliese. — Señor presidente: pienso decir muy pocas palabras, porque no corresponde a esta altura del debate y luego de la brillante exposición del señor senador por Córdoba, doctor Angeloz, insistir en las consideraciones de carácter jurídico y constitucional que impiden votar el despacho de la mayoría. Creo que en este sentido no puede haber dos opiniones.

Considero, así mismo, lo hayamos dicho expresamente o no, que todos estamos de acuerdo en condenar el acto sedicioso e incluso en la necesidad de que el mismo no quede impune y sean sometidos a la justicia los autores del mismo.

El argumento principal esgrimido para solicitar la sanción del dictamen consiste en la preservación del orden público y en garantizar la paz de la provincia de Córdoba, la que no podría lograrse con el cumplimiento de la obligación constitucional de reponer en sus cargos a los mandatarios elegidos en claro pronunciamiento del pueblo. El precedente es sin duda tan nefasto y de tan imprevisibles consecuencias que esas razones de seguridad, de paz y de orden público tendrían que ser analizadas con mayores elementos de juicio que los que se han aportado a este debate.

Por mi parte, no tengo la pretensión de refugiarme públicamente en los pliegues de la Constitución si realmente con nuestra actitud provocáramos a la provincia de Córdoba y a la República un mal mayor. Pero, ¿es suficiente que un jefe de Policía se niegue a cumplir con

las obligaciones a su cargo para que el gobierno federal se declare sin fuerzas para cumplir con el mandato constitucional? ¿Basta para declarar triunfante al movimiento sedicioso que se presume que existe en Córdoba una vasta conspiración y que esta conspiración necesita para triunfar que gobiernen en la provincia los mandatarios elegidos por el pueblo? Para nosotros, indudablemente, estos argumentos no son suficientes, por lo menos si no se nos aportan pruebas más concluyentes que realmente nos hagan pensar que estamos ante la disyuntiva de decidir entre el imperio de la Constitución y la salud pública como suprema ley.

Pero es necesario que se realice una investigación de los hechos para saber si Córdoba tiene un clima real, como se ha denunciado, o si es prefabricado para justificar la deposición de los mandatarios.

Señalo, por mi parte, la honda preocupación que conturba mi espíritu por la posibilidad de que este edificio de la convivencia nacional, en el que todos pusimos nuestros ladrillos de buena fe, se vea de pronto arrasado por los vientos de la intolerancia, la incomprensión y los intereses inconfesables. Conturba también mi ánimo esta «guerra santa» desatada contra lo que se califica, de manera genérica y ambigua, de marxismo, que se produce en momentos en que el Poder Ejecutivo nacional da pasos reales y concretos en el camino de la liberación y la ruptura de la dependencia externa, como son los actos afirmativos de nuestra autonomía de decisión y de la voluntad soberana de la República, que se traducen en el convenio comercial con Cuba, en la apertura hacia los países productores de materias primas, en los convenios con los países del área socialista y en la posición internacional argentina, todo lo cual, lógicamente, despierta recelos y lesiona intereses que sin duda han de presionar para fisurar y quizá romper esta unidad del pueblo argentino, por la que tanto trabajamos y por la que estamos dispuestos a seguir pagando todos los precios políticos que sea necesario ofrendar a la causa de la Nación. En este sentido apoyo con fervor y entusiasmo militante la patriótica posición del presidente de mi partido, doctor Ricardo Balbín, cuyas esforzadas gestiones por el diálogo, el entendimiento y la pacificación parten de la convicción de que sin esos prerequisites no habrá reconstrucción ni liberación, ni cambio, y, además, que en el caso de que esta política fracasara y vinieran los enfrentamientos, no serían hombres de distintas nacionalidades sino argentinos los que se matarían entre sí en el país. ¿Y en aras de quién y de qué intereses?

Con la fe que pongo en esta política del encuentro nacional, con la convicción de que esta política nos evitará males mayores, es que pido que no nos apartemos de la ley ni de la Constitución. Fuera de ellas está el caos. Si hoy triunfa la sedición de un sector, mañana nos

enfrentaremos a la sedición del otro, y el país entero habrá perdido una magnífica oportunidad.

Quizás esta defensa de las instituciones por encima de los hombres nos coloque hoy en contra de unos y mañana en contra de otros. Pero a través de este largo camino se reconocerá la coherencia de una conducta que tiene el mérito de ponerse exclusivamente al servicio del país.

Con este sentido y con este sinceramiento fundo mi voto en contra del despacho de la mayoría.

Sr. Cornejo Linares. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Luder). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Cornejo Linares. — Señor presidente: el señor senador por Córdoba, a quien indudablemente le tocan muy de cerca los graves acontecimientos que vive su querida provincia, nos ha hecho una magnífica exposición, de la cual resulta concluido, aparentemente sí, todo un silogismo. Su premisa mayor es la de que en Córdoba se produjo un acto de sedición, al que, por otra parte, reconocemos expresamente, como lo ha hecho el señor miembro informante del despacho de la mayoría.

Su premisa menor es la de que la Constitución, en su artículo 6º, en el caso de que haya requerimiento de un gobernador depuesto por un acto de sedición, obliga al gobierno nacional a restituirlo en sus funciones. Ergo, la intervención a la provincia de Córdoba sólo puede ser para restituir en sus funciones a los señores gobernador y vicegobernador depuestos por el acto de sedición.

Nosotros, señor presidente, lo mismo que los señores senadores de la bancada de la Unión Cívica Radical, hemos jurado defender y respetar la Constitución y fundar todos nuestros actos legislativos en el respeto a la Carta Magna. El mismo señor presidente de la República nos da el ejemplo con ese poder docente tan fuerte que tiene en la opinión pública argentina, en el sentido de que debemos ser esclavos de la Constitución, que es la única forma de poder tener libertad. Siendo esclavos de la ley hay libertad para el hombre. De otra forma es la anarquía y el desorden total.

De tal suerte, señor presidente, que si apoyamos el proyecto del Poder Ejecutivo y el dictamen de la mayoría, nos encontramos ante la encrucijada de saber si respetamos o no este juramento solemne que hemos prestado de defender las instituciones del país empezando por su Constitución. Yo creo que sí, señor presidente.

Comencemos por lo que se refiere al respeto a las autonomías. Sinceramente creo que el proyecto del Poder Ejecutivo respeta perfectamente la autonomía de la provincia de Córdoba.

Fue el mismo presidente Yrigoyen, el más conspicuo político de la Unión Cívica Radical y eminente presidente de la República Argentina, quien dijo en reiteradas oportunidades que la

autonomía no es de los gobiernos sino de los pueblos. Más aún: señaló en una comunicación que me permito leer, transcrita por Gabriel del Mazo en su conocido libro *El pensamiento escrito de Yrigoyen*, que la primera autonomía provincial es de orden interno y consiste en el respeto a los derechos primarios del ciudadano, para que logre contribuir a la creación y mantenimiento legal de las autoridades de su provincia. Respecto del poder federal, esa autonomía tiene las necesarias condiciones establecidas, no sólo por la Constitución, sino por la moral política, y desaparece en cuanto la perturbación del ejercicio de los derechos del pueblo requiere las reparaciones que para tales casos prescribe nuestra Ley Fundamental. No basta pronunciar la palabra autonomía; es menester además saber si ella existe en realidad, o, si al contrario, se pretende disimular detrás de ese concepto un falseamiento del sistema prescrito por la ley, para dejarlo impune o perturbarlo.

Nosotros sabemos perfectamente, y no se nos puede escapar porque es *vox populi*, tomada de muy diversas y distintas fuentes, que en Córdoba se ha perturbado tremendamente la paz y el orden internos, y no de ahora, sino desde hace ya bastante tiempo.

¿Puede haber autonomía cuando no se respetan las instituciones, cuando la garantía fundamental que tiene que dar el Estado a los individuos, que es el respeto de sus vidas y haciendas, está completamente perturbada? ¿Acaso no es la provincia de Córdoba aquella donde ha habido mayor cantidad de secuestros y donde se ha registrado el mayor número de atentados? ¿Acaso se ignora, señor presidente, que el señor gobernador Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López han tenido una serie de conflictos con los sectores más conspicuos del movimiento a que pertenecen y con los sectores gremiales?

Yo creo que esto, por sabido, no merece siquiera ser menedado.

Este principio de que la autonomía es de los pueblos y no de los gobiernos tiene una larga y meritoria tradición. Fue esgrimido, quizá por primera vez, en la República Argentina por Aristóbulo del Valle, uno de los grandes tribunos del siglo pasado.

Me voy a permitir molestar la atención de mis distinguidos colegas citando algunas frases de Aristóbulo del Valle en las que se define este concepto.

«La forma republicana de gobierno —decía el citado autor— de que habla nuestra Constitución, es aquella que reposa en la soberanía del pueblo, se constituye bajo el sistema representativo, con poderes limitados, llamados a desempeñar funciones determinadas: un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial y también un poder electoral. Pero como comprende, señor presidente, la base fundamen-

tal de la forma republicana de gobierno, en el sentido de nuestra Constitución, e instituciones, es el pueblo, de cuya soberanía originaria surgen todos los poderes del Estado. Si, pues, de alguna manera se altera de un modo radical aquella base, el gobierno republicano se modifica en su esencia».

Quizá vale la pena recordar a este respecto que los gobernantes, los legisladores mismos, no son más que mandatarios del pueblo. Es el pueblo el gran mandante. Tal lo señaló hace más de dos mil años aquel magnífico tribuno de la Roma republicana llamado Tiberio Graco cuando otro tribuno de la plebe, Octavio, que servía a los intereses de la oligarquía gobernante, se opuso a todas las reformas agrarias que él pretendía realizar en beneficio del pueblo. Tiberio Graco logró la destitución, no obstante el carácter sagrado que tenía el tribuno del pueblo, en un comicio curiato, fundado en esa situación del mandato, en que éste puede ser siempre revocado, y con mayor razón cuando el mandatario no cumple la voluntad fundamental del mandante. En nuestro caso —repito—, la voluntad del pueblo argentino es realizar la revolución en paz y en orden. Y en Córdoba no existe ni paz ni orden, ya que en estos momentos allí se vive no sólo un caos institucional, sino que existe una verdadera anarquía y falta total de garantías de los derechos esenciales del hombre.

¿Y cuál era entonces la solución? Ella está dada expresamente por el artículo 6º de la Constitución Nacional, referido a respetar la forma republicana de gobierno que, como institución creada para el hombre, tiene que comenzar por garantizarle a éste sus necesidades más elementales, que son la vida y el alimento.

Sabemos, señor presidente, que en Córdoba hay en este momento un gravísimo problema de abastecimiento.

Se ha dicho en este recinto que es un tanto sospechosa la demora o renuencia que ha tenido el Poder Ejecutivo nacional en poner remedio legal a esta situación de Córdoba. Por mi parte, debo expresar que el Poder Ejecutivo ha sido tremendamente respetuoso del orden provincial, y mientras se trataba solamente de una conspiración o sedición en ese medio se atuó a que sean las propias instituciones las que dieran el remedio legal. Y ante la imposibilidad total, absoluta, de que esa salida se consiguiese a través de las instituciones provinciales, se decidió adoptar esta medida, si se quiere heroica, trascendente, y de enorme importancia, que es la de intervenir al Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba.

Como se ha expresado en este recinto, existen numerosos antecedentes en lo que se refiere a intervenciones. El diario «La Nación» señaló ayer, acertadamente, que durante la primera presidencia de Yrigoyen se produjeron quince intervenciones, que sumadas a las siete de la presi-

dencia de Alvear, más las habidas durante la segunda presidencia de Yrigoyen da para la Unión Cívica Radical un buen *record* de intervenciones. Por nuestra parte, también cuando gobernamos, durante los años 1946 a 1955, sancionamos varias intervenciones, y muy justificadas por cierto, porque ellas se afirmaban en el principio substancial de mantener el orden, la paz interna y la tranquilidad social, para asegurar al individuo el goce y ejercicio de todos sus derechos.

Entre esos numerosos antecedentes, me voy a permitir leer uno muy similar al actual de Córdoba, que es el caso relacionado con la provincia de Santiago del Estero, acaecido en el año 1892, en cuyo debate en la Honorable Cámara de Diputados intervino el ya mencionado diputado Magnasco, citado por el señor senador Angeloz; el gobernador constitucional de Santiago del Estero por aquel entonces, don Absalón Rojas, había sido depuesto por una sedición. No me consta, pero es posible que en esa sedición hayan intervenido fuerzas policiales porque no creo que en esa época Santiago del Estero fuese más rica de lo que es ahora como para disponer los civiles de armamentos suficientes para alterar el orden y deponer al gobernador. Por lo tanto, más de un comisario debió estar complicado en esa sedición.

El Poder Ejecutivo, integrado por el presidente Luis Sáenz Peña, siendo su ministro del Interior el doctor Manuel Quintana, propuso el siguiente proyecto de ley: «Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo para intervenir en la provincia de Santiago, a los efectos de los artículos 5º y 6º de la Constitución Nacional». Traído a consideración del Senado este proyecto de ley, el señor Igarzábal defiende al gobernador y sostiene lo que se ha dicho aquí, con pocas palabras, eso sí, en el sentido de que es necesario que el gobernador, destituido por una sedición, sea restituido en su cargo.

Interviene el ministro del Interior, doctor Quintana, y manifiesta que «entiende el Poder Ejecutivo que la intervención es un derecho y un deber, que deben ejercitarse dentro de los límites de la Constitución, con la serena imparcialidad que debe distinguir todos sus actos. Si este proyecto pasa, como lo augura el breve discurso del señor senador y el silencioso asentimiento de los demás señores senadores, el Poder Ejecutivo entiende que, por él, estará perfectamente habilitado para nombrar un interventor que estudie a fondo la situación de Santiago y proponga, en consecuencia, la solución correspondiente. Si el señor gobernador Rojas debe ser repuesto, ¡lo será! Si el señor gobernador Rojas no debe ser repuesto, ¡no lo será!».

Vale decir que por este proyecto de ley se delegaba en el interventor federal el juzgamiento del gobernador. Nosotros somos mucho más ortodoxos y aquí juzgamos la situación de Córdoba de acuerdo con las facultades que tiene

el Congreso de la Nación, y sostenemos que la única solución posible para garantizar el orden y la paz interna es la intervención al Poder Ejecutivo.

Fundando estas expresiones, agregaba Quintana: «El artículo 5º de la Constitución es el *alma mater* de la materia; el artículo 6º no hace más que establecer la forma en que el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones: motu proprio, para repeler invasiones exteriores o garantizar la forma republicana de gobierno; a requisición de las autoridades constituidas, para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia».

El Senado aprobó esta tesis y sancionó en la forma propuesta por el Poder Ejecutivo el respectivo proyecto de ley, que pasó a la Cámara de Diputados. Esta, en cambio, siguiendo a Magnasco, estableció expresamente: «Artículo 1º — El Poder Ejecutivo intervendrá en la provincia de Santiago a objeto de reponer las autoridades derrocadas por la sedición». Como acotación histórica, corresponde saber que los autores de la asonada eran radicales y Absalón Rojas perteneció a lo que el presidente Yrigoyen llamó «régimen más falaz y descreído de que haya mención en los anales de la historia». Ocurrió que pronto se presentó el depuesto gobernador Absalón Rojas con diploma de senador de la Nación, no obstante haber sido elegido por una legislatura disuelta por la intervención federal. El señor senador Varela, que era de los pocos opositores entonces, pues pertenecía a la Unión Cívica, hizo todo un «racconto» de la situación imperante en Santiago del Estero. Y allí señaló conceptos muy interesantes, sobre todo aquel del antecedente del artículo 5º de la Constitución americana. Como sabrán los señores senadores, la Constitución norteamericana dice que el Estado federal protegerá a las autoridades provinciales cuando hayan sido objeto de una sedición o de una invasión exterior. En cambio, la Constitución Argentina en su artículo 5º dice «intervendrá». Es decir, el concepto es completamente distinto. Allí los Estados son prácticamente —podríamos decir— soberanos, por lo menos teóricamente y en lo que respecta al espíritu de la Constitución de Estados Unidos. Aquí los Estados tienen autonomía, no son soberanos. La soberanía definitiva la ejerce el pueblo de la Nación; los pueblos de las provincias no tienen más que autonomía.

Sosteniendo este criterio, decía Varela: «Si la Constitución nos hubiera dicho que el poder nacional protege a las autoridades existentes contra violaciones domésticas, simplemente hubiera ido el comisionado nacional a ponerse a las órdenes de la autoridad allí existente a prestarle su colaboración; pero como la Constitución dice «interviene», va el gobierno federal a reemplazar la soberanía local. Desde ese momento los poderes locales, provinciales, cesan en el ejercicio de sus

funciones. Es el poder nacional sólo el que gobierna mientras está allí, porque no son conciliables las dos soberanías gobernantes.

Yo diría aquí que la autonomía, que es una soberanía si se quiere disminuida, tiene que ceder ante la soberanía plena, que es la de la Nación sobre la autonomía de la provincia.

Fíjense los señores senadores que como entonces el señor senador cuyo diploma se cuestionaba, don Absalón Rojas, era del riñón conservador, se lo aceptaron, lo que llevó al colmo de la indignación al señor senador Varela, quien renunció a su banca ante esta situación. Por supuesto que esto no viene al caso; lo menciono únicamente para que esta anécdota histórica no quede inconclusa.

Sr. Fonrouge. — Sobre todo porque el riñón no siempre es la mejor viscera del cuerpo.

Sr. Perette. — Depende de quién se lo coma.

Sr. Fonrouge. — Estoy seguro de que usted no lo comería.

Sr. Cornejo Linares. — De ahí, señor presidente, que el silogismo tan inteligente y tan elocuentemente construido por el señor senador Angeloz carece de base. Yo diría que le falta el ladrillo fundamental, a que aludió el señor senador Pugliese, en su edificio de libertad y Constitución.

Yo creo, señor presidente, que ante esta gravísima emergencia no se trata ya de resguardar una cosa inerte y rígida como es un edificio. Pienso que el símil es resguardar y proteger el árbol de la libertad, que está en el respeto de la ley y de la Constitución, y en la servidumbre, si se quiere, a las instituciones madres del país, para impedir que las plantas parásitas estrangulen su tronco ahogando la corriente de su savia vital.

De eso se trata, señor presidente. Nosotros tampoco hacemos cuestión de hombres, pues es una cuestión de instituciones. Por eso quizás los peronistas siempre hemos dado el ejemplo de intervenir a los gobernantes de nuestro propio partido. En cambio, no conozco ningún caso en que la Unión Cívica Radical haya intervenido a un correligionario.

Sr. Perette. — Porque han sido todos muy buenos. (Risas.)

Sr. Cornejo Linares. — Sí, conozco casos en que la entonces Unión Cívica Radical Intransigente intervino a gobernadores correligionarios, pero no la Unión Cívica Radical del Pueblo, ahora Unión Cívica Radical.

De tal manera, pues, que nosotros no hacemos cuestiones pequeñas ni de hombres. Estamos por la revolución en paz y en orden, para nosotros y para la posteridad de la Argentina, de América latina y de todo el mundo, para cuando organizados y logradas nuestras reivindicaciones fundamentales de orden económico y social, podamos tener la voz tonante y fuerte de una Argentina potencia.

Sólo queda por decir, señor presidente, que una vez más estamos aquí debatiendo con altura y respeto mutuo un grave problema institucional, y en ese sentido felicito a los miembros de las bancadas opositoras por el nivel en que han contribuido a mantener el debate.

Así mismo, señor presidente, podemos tener la más absoluta seguridad de que al votar este proyecto de ley en la forma que aconseja la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no abjuramos de nuestra promesa de respetar la Constitución y la ley.

Nada más.

Sr. Frugoli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Luder). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Frugoli. — Señor presidente: necesito muy pocas palabras para hacer pública mi posición con respecto al tema que está analizando el Honorable Senado de la Nación.

Creo que las consideraciones de carácter jurídico que se han hecho son suficientemente ilustrativas como para no volver sobre ellas. Diré tan sólo que podría destacar opiniones de importantes juristas que sustentan posiciones opuestas a muchas de las que aquí se han sostenido.

Quiero señalar, en primer término, que considero una grave falta, imputable al Poder Ejecutivo nacional, no haber actuado en forma inmediata y drástica apenas producido el hecho sedicioso que significó el derrocamiento del gobernador y del vicegobernador de la provincia de Córdoba.

Creo que una decisión del gobierno central en esa oportunidad, hubiera permitido dar una solución aceptable al problema y restablecer, sin mayores inconvenientes, a las autoridades depuestas en sus cargos. Pero los cinco días que han transcurrido desde entonces —y los que probablemente transcurrirán hasta que la ley sea sancionada— han generado un proceso de descomposición tal en la provincia de Córdoba que hace que allí no exista, no diré ya la forma republicana de gobierno, sino las condiciones más elementales de la convivencia.

Deseo indicar también que la actitud del jefe de Policía es tan grave, tan insólita y negativa, que argumentar para tratar de demostrar esto significaría quedarse siempre por debajo de su gravedad.

Tengo la esperanza de que este funcionario sea encuadrado dentro del Código Penal y sancionado como corresponde, porque no puede aceptarse de ninguna manera que un jefe de Policía se levante en armas frente a las autoridades constituidas, ya que con ese criterio terminaríamos aceptando directamente que la ley del matonaje es la que debe regir la vida institucional del país.

En este momento la situación en la provincia de Córdoba es, en síntesis, la siguiente: no rigen allí los derechos y garantías individuales y co-

lectivos que la forma republicana de gobierno supone; la actividad económica y comercial está totalmente paralizada; el transporte no funciona; el temor se ha adueñado del pueblo de Córdoba; la ley de la selva es la que impera en el año 1974 en esta provincia, que ha sido una de las más avanzadas en el orden de la cultura.

Frente a esta situación, que es una realidad palpitante que nadie puede desconocer y que el periodismo en sus distintas manifestaciones ha hecho patente —tengo sin ir más lejos, sobre mi banca, la edición de esta tarde del diario «La Razón» y en ella los titulares y las noticias son realmente alarmantes—, frente a este panorama, no creo que quede otra solución que el envío de la intervención federal a la provincia de Córdoba. Lo digo sobre la base de lo establecido en la propia Constitución Nacional, que no se agota con la segunda parte del artículo 69; también hay que tener en cuenta la norma contenida en la primera parte del artículo 69, el Preámbulo, los artículos 14, 18 y otros. Entiendo además que la aplicación de una norma jurídica requiere un análisis realista de la situación y no se hace de manera mecánica, como el farmacéutico que indica una aspirina para el dolor de cabeza.

La Constitución no es un conjunto de normas frías impresas en un papel. Debe ser una realidad viva, existencial y aplicada e interpretada en función de esa realidad.

Creo que para que logremos el pleno restablecimiento de las instituciones republicanas de Córdoba, particularmente la autonomía provincial de la que por cierto —y esto es obvio que lo diga— me declaro un fervoroso defensor, es necesario que apliquemos el remedio que la Constitución nos está indicando.

A mí me ha parecido advertir, detrás de algunas expresiones, la idea de que el artículo 69 de la Constitución Nacional viene a ser algo así como una disposición desprestigiada, como si se tratara de una norma que no obstante estar en la Constitución atentara contra ella y la traicionara. Creo que no es así. Es más, en mi opinión este artículo 69 ha tenido una razón de ser fundamental, cual es la defensa de los derechos de las provincias como entidades autónomas. Quizá se haya hecho un uso equivocado del mismo o se hayan cometido abusos en su aplicación, pero ése es otro problema.

Entiendo que en este caso, frente a lo que está pasando en Córdoba en este momento, no podemos —de ninguna manera— eludir nuestra responsabilidad. Lo digo como hombre del interior, como mendocino celoso de la autonomía de mi provincia, en la que funcionan normalmente sus instituciones. Lo expreso como legislador que se opuso enérgicamente a la intervención a la provincia de Formosa y que reiteraría esa conducta en un caso similar. Y con la autoridad que me dan estos títulos yo digo —en esta oportunidad— que apoyo la intervención a la pro-

vincia de Córdoba, porque creo que Córdoba tiene derecho a la paz, a una paz real y no retórica, así como a la vigencia de las instituciones republicanas. Pero, repito, no una vigencia retórica y verbalista sino real y auténtica, y no advierto que por otro camino se pueda arribar a esa solución.

En Córdoba las pasiones han llegado a un grado tal de exacerbamiento entre los sectores en pugna que lo único que corresponde hacer es dar una solución objetiva, que esté por encima de las fracciones opuestas.

Yo pregunto, si intentamos, so pretexto de la rígida aplicación de la segunda parte del artículo 69 de la Constitución, un restablecimiento, una marcha atrás del proceso, ¿a qué precio habría que realizarlo?

Quizá me hubiera resultado cómodo eludir este tema, pero tengo el defecto de no poder disimular mis estados de conciencia, y aun a riesgo de no ser, quizá, interpretado como correspondería, expreso lo que en este momento estoy manifestando, porque me quiero ir con la tranquilidad de haber hecho lo que mi conciencia cívica y política me dicta en este momento.

Por eso, señor presidente, consciente de lo que estoy diciendo, con un gran respeto hacia el pueblo de Córdoba, al cual veo víctima de una situación que no ha generado, y considerando que tiene derecho a la tranquilidad y a la pronta recuperación de su plena autonomía, y con la total convicción de estar haciendo lo único que es posible en este momento —y la política, como saben los señores senadores, es el arte de lo posible— yo digo que apoyo la intervención a la provincia de Córdoba.

Nada más.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Luder). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente, señores senadores: a esta altura del debate se ha manifestado prácticamente todo lo que había que decir. Como miembro de la comisión he presentado un despacho en disidencia al cual he acompañado algunos breves fundamentos que fijan mi pensamiento y la posición de nuestro sector. Pero considero un imperativo de conciencia formular en esta instancia algunas reflexiones sobre la situación institucional de la provincia de Córdoba y la solución que se procura darle a través del proyecto de ley de intervención que se está considerando.

Al hacerlo no puedo olvidar que esta noche se ha repetido y remarcado con insistencia el origen de los episodios. Por un alzamiento de las fuerzas policiales de la ciudad de Córdoba, el gobernador, el vicegobernador y otras autoridades fueron destituidos de sus cargos y encarcelados. Recuperada su libertad, el gobernador hizo público su requerimiento de intervención, lo que a su vez había hecho también la Cámara

de Diputados reunida en sesión especial. En rigor, señor presidente, ante el carácter de los acontecimientos y la imposibilidad física en que las autoridades legítimas se encontraban para efectuar ese requerimiento, éste resultaba una formalidad innecesaria. Por ello, el silencio y la inacción del gobierno central ante el curso de los acontecimientos significaron en la práctica que el alzamiento policial lograra sus fines, en lugar de sancionarlo como correspondía, y esto ha sido perjudicial para la salud y el prestigio de las instituciones.

El episodio, por eso, si el antecedente no se olvida, solo puede ser superado mediante la intervención del gobierno central, pero no para servir a los fines de la subversión sino para restablecer la plenitud de las instituciones provinciales, reponiendo en sus funciones al gobernador, al vicegobernador y demás autoridades destituidas y asegurar, con la presencia de la fuerza nacional, el orden, la paz y la tranquilidad públicos.

En este asunto hay un problema constitucional, por una parte, que es claro, no obstante los esfuerzos que quieren hacerse en otro sentido. Frente a la sedición que depone a la autoridad legítima, el gobierno central tiene el deber de intervenir para garantizar el ejercicio del poder. Hay también un problema político actual que es el de restablecer el orden, y ese objetivo se logra cabalmente mediante el despacho que nuestro sector ha formulado, es decir, una intervención que a la vez que asegure el orden restablezca la plenitud del ejercicio del poder por parte de la autoridad legítima. Pero el más grave es, finalmente, el problema del precedente y del ejemplo que se crea, que es la posible convalidación de la sedición que resultará triunfante en sus fines, aunque aquí la hayamos condenado casi unánimemente.

El país se ha visto sorprendido por la noticia de este hecho sedicioso que ha conmovido a la provincia de Córdoba. Sabíamos por experiencia dolorosa de los golpes de estado provocados por grupos militares, y ya parecía definitivamente superada la posibilidad de que las «guardias provinciales» —hoy reemplazadas por las policías— se alzarán contra sus gobiernos. La sedición era por eso un delito vigente en el Código Penal pero prácticamente olvidada en los anales de la jurisprudencia. Si hubiese que buscar algún antecedente tendríamos que remontarnos mucho tiempo atrás. El señor senador por Salta ha tenido que acudir a un precedente de 1893, es decir, del siglo pasado. Tal vez haya alguno más cercano, cuando en 1935 tuvo que intervenir el gobierno central en la provincia de Buenos Aires para reponer en sus funciones al gobernador renunciante, que fue después destituido por juicio político, es decir, en el marco de las instituciones provinciales.

Hoy todos coincidimos que ante la sorpresa del país estamos en presencia de un caso típico de sedición en Córdoba, como lo ha calificado

con sinceridad el señor miembro informante de la mayoría de la comisión. El jefe de Policía, declarado cesante y después exonerado por el Poder Ejecutivo provincial, desconoce esa decisión, continúa en funciones usurpando el cargo e invade la Casa de Gobierno, deteniendo a las autoridades legítimas. Se consuma así un golpe de estado, señor presidente. La Constitución Nacional —no hay que esforzarse mucho para interpretarla en su cabal sentido— prevé para estos casos el auxilio del gobierno central, y esto no hay que buscarlo solo en el artículo 69 sino en el 59, donde se dice que el Estado nacional garantizará a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Pero como el gobernador está preso y no puede enviar un requerimiento formal de intervención, se ha dejado a la provincia librada a su suerte. Se ha consentido así, por la inacción, el avance de la sedición. La situación se ha agravado. Han aparecido grupos de civiles armados que dicen controlar el orden, y se habla de ataque a las fuerzas policiales. Aparece el brazalete amarillo, al que se ha aludido varias veces, como signo de un nuevo poder. Y a esta altura, cuando la población está insegura y conmocionada, se declara, como único remedio posible, la intervención federal, pero no para reponer la autoridad legítima sino para reorganizar y hacer caducar al Poder Ejecutivo.

Y con esto, la sedición logra sus fines y se allana la autonomía provincial, sentándose un precedente funesto que viene a ser como una suerte de premio a la violencia que se ha ejercido.

En este juicio crítico frente al episodio ocurrido y sus consecuencias han coincidido varios sectores del quehacer político argentino. Lo ha hecho, por ejemplo, el Partido Socialista Democrático, que ha declarado que el Poder Ejecutivo nacional debió haber repuesto a las autoridades provinciales, compulsivamente desalojadas del poder, y no aceptar el acto de sedición. Lo han expresado también relevantes figuras políticas y la mayor parte de los sectores de la oposición representados en este Senado.

Es que esto, señor presidente, no es un problema de silogismo como lo plantea el señor senador por Salta, cuya ausencia del recinto en este momento lamento, porque el silogismo es, en el fondo, una cuestión de lógica, y esto no tiene lógica ni razón que sirva para comprenderlo.

Este proceso se inicia y culmina en el seno del propio partido gobernante; y si lo miramos de este modo es como si se tratara de una verdadera revolución oficial. Se ha buscado un procedimiento para sacar al gobierno de la provincia, y se ha buscado el peor, uno que dañe irremediabilmente las instituciones.

A esta altura de los acontecimientos el país se pregunta ¿por qué se desatan estas tempestades?, ¿quién, levantando las banderas de la paz, quiere imponer la paz por la violencia?, ¿cómo se pone en marcha este mecanismo de

desprestigio de las instituciones?, ¿por qué logra sus fines la sedición de la policía, que dejará el rastro de un ejemplo lamentable?, ¿quién asegura que ese ejemplo no se volverá a repetir?

Aquí cabe un solo camino, y ése es el que lealmente hemos elegido nosotros: demostrar que se está en contra de la sedición, que se está con la legitimidad, que se reacciona en este sentido, señor presidente; y esto sólo se hará mediante la intervención federal que reponga la autoridad legítima y castigue la sedición. Una vez repuesta, si cabe, que funcionen los mecanismos institucionales para reemplazar al gobierno. Está el comicio donde podrá juzgarlo el pueblo, o el juicio político si ha faltado a su deber; pero no es con trágicos y violentos despliegues como deben resolverse estos pleitos.

Nosotros no defendemos, en este caso, ni a una persona ni a un gobierno. No buscamos tampoco un beneficio partidario. Nuestra causa es la defensa de los principios y de la Constitución.

Estos tristes episodios, con su saldo lamentable, constituyen un traslado al plano institucional de divergencias partidarias. Nosotros no entramos en ellas; no tomamos lado en las controversias del partido oficialista, que debe saber encontrar el rumbo para evitar enfrentamientos de este tipo.

Como digo, no defendemos ni a un hombre ni a un gobierno, sino los principios fundamentales de la República que no pueden ser dejados de lado. Cuando se juega así, se está jugando con fuego, porque se está sentando la posibilidad de un precedente riesgósimo para el futuro.

A esta altura no es solamente la crisis de una provincia lo que preocupa a la ciudadanía, sino saber hasta cuándo y hasta dónde seguirá este camino, cómo puede profundizarse y a qué rumbo conduce, porque estos hechos han demostrado que hay armas en la calle, que son las armas de los grupos antagónicos que se enfrentan en una sucesión peligrosa de ataques y defensas.

Frente a esto, hay derecho a preguntar: ¿por qué la lucha política está siendo convertida, ahora más que nunca, en una lucha de fracciones armadas?, ¿cómo se logrará desarmar el brazo y el espíritu?

Este es, señor presidente, el interrogante dramático que se plantea el pueblo, que dice su voluntad en las urnas; de un pueblo que votó por la paz; de un pueblo que confía las armas de la patria a los hombres de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad, para que respeten su voluntad y no para que la violenten.

No se trata, señor presidente, para nosotros, de elegir entre dos bandos, ni buscar lo que más nos favorezca, sino de actuar con autenticidad, y cumplir el mandato ineludible que consideramos emana de la Constitución Nacional. No es cuestión de sectores ni de partidos, sino de defender las instituciones con el supremo ejemplo de la reparación. Nosotros no hacemos causa común con ninguno de los sectores en pugna. Con-

denamos la sedición, y como nuestro compromiso es con el país, queremos restaurar la ley para que salga fortalecida de la crisis. Nuestra causa es la de las instituciones republicanas, y para defenderlas, y no para allanarlas, proponemos la intervención del poder central a la provincia de Córdoba, en la forma en que lo hemos hecho en el despacho que subscribimos.

La provincia de Córdoba tiene una larga y acreditada conducta en las luchas argentinas; ha hecho grandes aportes a la cultura nacional, y ha dado supremos ejemplos de civismo, por lo que merece mejor suerte y mejor juicio que el contenido en el mensaje del decreto 417, como bien lo ha señalado el señor senador por Córdoba.

Obramos así convencidos de que tenemos el deber de preservar la unidad nacional. Que el oficialismo no deje de hacer su aporte a esa causa. Nosotros no hemos dejado de hacer el nuestro para consolidarla.

Nada más.

Sr. Fonrouge. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Luder). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Fonrouge. — Señor presidente: si no fuera por la consideración especial que tiene bien ganada el señor senador Pugliese no habría sido necesario que agregase una sola palabra a lo expuesto, porque, en definitiva, el despacho de la mayoría no ha sido ni destruido ni impugnado fundamentalmente como para exigir nuevos apoyos. Pero ante sus observaciones estimo indicado agregar que ha sido precisamente la voz de los sectores representados por los senadores de la oposición la que se ha encargado de merituar la gravedad de los acontecimientos que conmueven a Córdoba y que ha puesto en seria alarma a la República.

La voz de los opositores ha señalado en medida exacta el problema que preocupa al país. Y sus argumentos por la autoridad de los oradores, por la sinceridad que les reconozco a todos —que supera la modestia de quien hace esfuerzos por espejar exactamente la realidad que aconseja la intervención—, ha puesto el mejor colofón para cerrar las argumentaciones necesarias.

Estimo, señor presidente, que el Poder Ejecutivo se ha adelantado a esta justipreciación de antecedentes y que la intervención proyectada en los términos en que se hace, apoyada en facultades constitucionales indiscutibles, se afirma en la necesidad de no perder más tiempo. Ese es el balance de esta noche.

La República puede descansar en este Senado de la sensatez. Con este debate hemos contribuido a que el país sienta la seguridad de que sus representantes no duermen y que por encima de las banderías están al servicio de los mejores y más patrióticos propósitos.

Sr. Perette. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Luder). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Señor presidente, señores senadores: es indudable que éste es un debate trascendente que considera un problema vital. Coincidió con lo que se ha expuesto, en el sentido de que éste es un debate esclarecedor, respetuoso de la idea ajena y en el que cada uno ha querido aportar lo mejor de sí mismo para la solución de un problema que no es sólo de Córdoba, sino que atañe a la vida de las instituciones democráticas argentinas.

Nadie niega, señor presidente, señores senadores, que estamos en presencia de un grave problema. Negarlo sería desconocer una evidente realidad. Las diferencias en esta controversia y en la solución de cada sector radican en el punto donde se encuentra el mal y en cuáles son los remedios eficientes e idóneos para que Córdoba viva la plenitud de sus instituciones, que es también como decir en este momento la plenitud de las instituciones de la República.

—Ocupa la presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador José Antonio Allende.

Sr. Perette. — Nadie se llame a engaño. Existen muchos grupos que están esperando el error de la civilidad, que prefieren un pueblo dividido a un pueblo cohesionado, y nosotros luchamos por sectores unidos en la búsqueda de las grandes soluciones de la República.

No nos equivoquemos ni encontremos en los precedentes del pasado una justificación de los graves errores del presente.

Nosotros vamos a defender nuestra función opositora porque es raíz y esencia de la democracia. Negarla sería destruir las bases y estructuras del régimen republicano de gobierno; pero nadie tampoco nos va a obligar a ubicarnos en la política de frustración y de negación para que el país caiga en cualquier clase de totalitarismo, de aventura o de extremismo disociador.

Lo digo porque ante todos estos hechos que nos deben llamar a la reflexión debemos tener también la capacidad superadora para que el destino argentino no nos obligue al enfrentamiento, a la división o al odio que son precisamente la negación de una nueva etapa de la vida nacional.

Córdoba ha padecido una grave crisis. Pero ¿quién la provoca y cuál es el remedio? ¿Acaso la provoca un conflicto de poderes, que es lo que aquí se ha perdido de vista? ¿Acaso un conflicto entre la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial? No, no hay conflicto de poderes, absolutamente, entre los poderes ejecutivo, legislativo o judicial. Ha surgido un «Cuarto Poder», que es el que ha fabricado, ejecutado y realizado este verdadero complot contra las instituciones democráticas de Córdoba.

Es el «poder policial», que no sólo ha incurrido en la sedición sino también en las causales previstas en la tan mentada reforma penal

referidas a la privación ilegal de la libertad de las personas, porque ha existido secuestro y ha incurrido también en abuso de autoridad y en asociación ilícita.

Es decir, un cuarto poder desconocido en la vida argentina, el «Poder Policial» —y lo digo con todo respeto por las policías argentinas—, se convierte de pronto en todopoderoso, que no sólo domina las instituciones provinciales sino que subordina también al gobierno central que aparece impotente para imponer la gravitación de su poder, que es precisamente de donde surgen las entrañas y los fundamentos de los artículos 5º y 6º de la Constitución Nacional.

El poder policial ha realizado lo que podríamos llamar un «Navarrazo» o un «Polizazo» porque en definitiva no son las instituciones, no son los poderes legítimos los que se han enfrentado.

Observen los señores senadores la diferencia de criterio. En el caso de Formosa, había un conflicto entre el Poder Ejecutivo, mejor dicho el gobernador, con el Poder Legislativo, que le había hecho juicio político. En ese caso lo que correspondía era hacer lugar al juicio político y asegurar la continuidad institucional de Formosa; y se hizo lo contrario.

En Buenos Aires, se produce el criminal episodio de Azul, que todos condenamos. Como consecuencia, y de «carambola», resulta la liquidación del gobernador de la provincia, que no era el jefe del regimiento de Azul.

Y aquí, en este caso, resulta que hay un jefe dueño de la fabricación de un cuarto poder, el poder policial, el que determina la sedición.

Ocurre entonces que en lugar de tomar las medidas contra el jefe sedicioso, quitarle la fuerza de la radio y la televisión, de las que se había apoderado, se dispone lo contrario. Primero, un mensaje «preparatorio» que es verdaderamente la negación del espíritu inmortal de Córdoba; y después un mensaje definitivo que le da culminación al proceso intervencionista.

De manera que el episodio es grave, pero hay que ver la causal, la responsabilidad y el remedio. Modestamente, jamás nos creemos dueños de la verdad. Entendemos que la solución que propicia el radicalismo, con la inmediata restitución de los gobernantes elegidos por el pueblo, es la mejor. Y nadie ha podido demostrar que la otra, la liquidación de la soberanía popular, va a ser la que va a traer sosiego, paz y tranquilidad en Córdoba. Lo deseo fervientemente y lo espero como argentino, por encima de los sectores partidistas.

Pero el problema no es ése. El problema es que aquí hay una responsabilidad creada y no podemos volver a engrandecer la «trinchera de la impunidad», que yo he denunciado en el caso de Ezeiza, y de ahí en adelante, en todos los episodios de violencia. Téngase en cuenta que

va a quedar impune el sistema de sedición, y que ésta se va a jactar de haber fabricado la demolición de los gobernantes elegidos por el pueblo. La sedición se jactará de haber instituido un sistema para la liquidación de los gobernantes, y yo me pregunto ¿qué ocurriría si se volviera a secuestrar a un gobernador? Con la teoría que ahora sustenta el Poder Ejecutivo se podría declarar la acefalía de ese régimen provincial y el cese de la autonomía de un estado, que no basta invocarla como pueblo ni como gobierno, sino que hay que ejecutarla en su exteriorización.

¿Qué ocurriría si se produjeran rebeliones semejantes en Santa Fe, Mendoza, Salta o Chubut? No podemos desconocer que hay una serie de problemas que no nos pertenecen pero están rozando directamente las instituciones y afectando seriamente la vida de las instituciones argentinas.

Nosotros —y contesto al señor senador por Salta, cuya ausencia lamento— estamos defendiendo la institucionalización de gobiernos que no nos pertenecen políticamente, pero lo hacemos porque el conjunto de autonomías y de poderes provinciales conforma el conjunto de la institucionalización nacional.

¿Es que acaso estamos defendiendo las bancas de los legisladores y de los representantes municipales? Absolutamente no. Hicimos lo mismo en el caso de Buenos Aires y de Formosa y lo volvemos a hacer en el de Córdoba, porque si no se produciría lo que señalaba Alberdi al marcar el desmembramiento de las soberanías del interior del país, que se van aniquilando.

Sr. Martiarena. — ¿Me permite, señor senador?

Confío en que el señor senador, que usó este género de argumentación para referirse al caso de Formosa específicamente, y que se piensa así para el de Buenos Aires, reconocerá su error de perspectiva y de apreciación, ya que estamos convencidos —y nuestra convicción responde a una enorme tranquilidad de conciencia—, de que en aquellos casos, en virtud de haberse ejercido la alta custodia de los principios fundamentales por los cuales se manifestó el pueblo argentino, se han recuperado los márgenes de tranquilidad y felicidad que no existían hasta que ocurrieron los sucesos a que se refiere.

Espero que coincidamos en que éste es un resultado feliz de dos situaciones resueltas por el gobierno de la Nación.

Sr. Perette. — Señor presidente: gustosamente voy a contestar al señor senador Martiarena.

Entiendo que las medidas adoptadas con Formosa no tenían ni tienen razón de ser. El hecho de que Formosa esté trabajando en orden en su construcción, no significa una justificación del avasallamiento de su autonomía.

En el caso de Buenos Aires debo advertir que la solución fue distinta a la del caso presente. Vuelvo a repetir que cuando el señor presidente de la República —y lo digo respetuosamente— afirmaba que lo sucedido en Azul es la consecuencia de lo que estaba ocurriendo en la provincia a cargo de autoridades incompetentes, eso es absolutamente injustificable, en mi opinión, porque no tenía razón de ser el episodio en un caso y otro. Si tenía que plantearse la cuestión al señor gobernador Bidegain, debió utilizarse el camino del juicio político. De manera que, señor presidente, le reconozco al señor senador Martiarena que ojalá esos dos Estados provinciales se mantengan en esas condiciones de tranquilidad, pero no es la solución legal ni constitucional y veremos su futuro.

Qué ocurriría, vuelvo a insistir, si se repite lo de Córdoba —no la situación de Formosa—, en ocho o diez provincias del país. Seguiría desmembrándose el poder político y la institucionalización de la República.

Es decir, señor presidente, que por vía del allanamiento de las autonomías se monopoliza el poder central, se centraliza más el poder y se aniquila el derecho de las oposiciones que es esencia del régimen republicano.

Por eso, cuando aquí se habla de la «servidumbre a la ley», como lo ha expresado el señor senador por Salta invocando las palabras del señor presidente de la República, ésta no es una expresión abstracta, sino que tiene obligación, contenido, esencia y finalidad, que no se cumplen en este caso.

Me pregunto: ¿qué hubiera sucedido si al día siguiente de la rebelión del jefe de Policía, hubiera tomado una determinación inmediata el Poder Ejecutivo nacional, cosa que no hizo? Estoy seguro de que inmediatamente terminan esa sedición y esa subversión.

Es por ello, señor presidente, que le asigno la correspondiente responsabilidad al Poder Ejecutivo. Pero no quiero de ninguna manera dañar la imagen del presidente de la República y deseo creer que no ha tenido nada que ver con ese primer mensaje, ni siquiera en esta decisión en cuanto se le ha creado un clima que pudo, debió y debe resolverse por la vía del sistema institucional y autónomo de cada provincia.

Es evidente, señor presidente, que no estamos aquí defendiendo a un gobernador, a un vicegobernador o a un binomio gubernativo, sino un principio de soberanía popular, un mandato popular que aquí se ha invocado por el señor senador por Salta, mandato que ha sido negado.

Afirmo lo siguiente: Córdoba no está en crisis, ni tampoco los cordobeses; se encuentran en crisis sectores del oficialismo y el propio presidente de la República lo ha señalado...

Sr. Britos. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. Perette. — Sí, señor senador.

Sr. Britos. — Quería señalarle al senador Perette, que entiendo que será el último de los oradores de la bancada opositora...

Sr. Pugliese. — ¿Va a pedir que se cierre el debate?

Sr. Britos. — No, señor senador.

Sr. Martiarena. — ¡Nunca hemos pedido el cierre del debate!

Sr. Presidente (Allende). — Ruego a los señores senadores no dialogar y que permitan el uso de la palabra el señor senador Britos.

Sr. Britos. — Los señores senadores de la bancada opositora han tratado el problema interno del Movimiento Nacional Justicialista, y ellos saben perfectamente que nosotros entramos al proceso de institucionalización luego de 18 años y después de una lucha en la que la dictadura nos proscribió incluso a nuestro propio jefe. Además, para suerte de la Unión Cívica Radical, el ministro del Interior de la dictadura era un hombre de su partido. Evidentemente aquí algunos jugaron con cartas fáciles y nosotros con otras muy difíciles. Tuvimos que vivir el proceso de la provincia y hacer las cosas urgidos por las circunstancias, mientras que a otros no los apuraba nadie y podían actuar tranquilamente.

Por eso quiero señalarle al señor senador, porque sé que se va a extender en la consideración del problema del justicialismo, que aquí nos han tocado un poco «la llorona», y que se hace necesario que lo aceptemos como crítica política, así, en general y en particular solicitamos que aquellos que quieran opinar internamente sobre el movimiento justicialista se afilien al mismo.

Sr. Perette. — Y usted afiliese entonces a la Unión Cívica Radical.

Sr. Britos. — No me voy a afiliar porque no me han demostrado lo contrario.

Sr. Presidente (Allende). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Señor presidente: he escuchado con atención al señor senador Britos y quiero señalar que cada vez que los señores senadores de la mayoría encuentran nuestra discrepancia se dedican a hacer antirradicalismo. Por ejemplo, el señor senador por Salta —que lamento que no esté en el recinto porque lo estimo muy especialmente— lo ha mencionado a Yrigoyen no sé si para atacarlo, para aplaudirlo o para apuntalarse en él. El señor senador invocó que un hombre del radicalismo estaba al frente del Ministerio del Interior. Se trata del doctor Arturo Mor Roig, para mí un digno ciudadano, un hombre que renunció a la afiliación, ya que el radicalismo no avalaba de ninguna manera su designación y que además no prestó ningún servicio a nuestro partido. La prueba está en que ocupan el gobierno los hombres de la mayoría y no nosotros. (Risas.)

Pero quiero señalar lo siguiente: cuando yo he hablado —y además lo hago en castellano— no hice ninguna intromisión en la vida del justicialismo, porque no permitiría que se interviniera en la vida interna radical.

Pero éste no es el caso, ya que no lo decimos nosotros. Lo ha puesto de manifiesto el propio presidente de la República, que ha aplaudido a la oposición y ha dicho que los problemas los tiene con los hombres del oficialismo. Es decir, que cuando hago esta invocación me estoy refiriendo a la médula del problema. No tendría la osadía de penetrar en la vida interna de otro partido mientras que eso se ha hecho en este debate, porque si aquí se quiere hacer antirradicalismo, yo no voy a hacer el juego y efectuar antiperonismo, pues podría referirme a lo que ha ocurrido en el país entre 1945 y 1955, ya que el señor senador por Salta ha mencionado una serie de antecedentes y precedentes.

Y esa serie de invocaciones de precedentes me está demostrando la sinrazón de esta medida, que además no tiene apoyo jurídico, ni en los hechos ni en el derecho.

Así mismo, señor presidente, se debe reconocer lo siguiente: nosotros no estamos haciendo la defensa del binomio gubernativo de Córdoba. Tienen que defenderse ellos, los que han actuado con ellos y quienes los sostengan. Nosotros estamos defendiendo una cosa que no tiene nombre propio: es la institución, la autonomía, la provincia, la soberanía, y no queremos caer directa ni indirectamente en ningún período del antipueblo.

Por eso, señor presidente, quiero advertir que nuestra posición y nuestros empeños tienen el propósito de dar nuestra contribución de seguridad en el país; y esa seguridad va a ser quebrantada.

Entiendo personalmente que el jefe de Policía debe ser procesado, así como que la sedición debe ser condenada de manera concreta y expresa.

Estimo que a este precedente lo debemos matar hoy mismo porque ya veremos quiénes serán las futuras víctimas.

Feliz o desgraciadamente nosotros no corremos el riesgo de ser ninguna de las víctimas provinciales. ¿Es posible que se haya podido armar, prefabricar toda esta rebelión policial? Pero después que el actual presidente de la Cámara de Diputados vino a Buenos Aires y se entrevistó con el señor presidente —y ahí sí yo le atribuyo responsabilidad a este último— retorna a su provincia y ratifica al jefe de Policía. Es decir ratifica la sedición, y lo que hay que intervenir es la sedición y no la autonomía ni el mandato popular. Nosotros, señor presidente, hemos sido muy claros en esto. Hemos dado un camino.

Coincidió con el señor senador Fonrouge en que podemos equivocarnos en cualquiera de los tres despachos, porque hay tres...

Sr. Fonrouge. — Yo preferiría que se equivocara el señor senador.

Sr. Perette. — Le anticipo que desearía equivocarme por el bien del país.

Sr. Fonrouge. — Veo que es muy patriota.

Sr. Perette. — Sabe bien el señor senador Fonrouge que yo aquí no quiero venir a traer la nota de pesimismo. Esta discrepancia no nos va a dividir. Esto se lo tenemos que decir a los civiles y militares de la República. Esto no es un cuartelazo. Esto es un alzamiento policial que se da como consecuencia del proceso de depuración ideológica que se ha lanzado en el país.

Nosotros hemos condenado el proceso de Azul y el salvajismo que se ha empleado; pero también hemos condenado los 19 atentados de la derecha o ultraderecha que contestaron a Azul.

Hemos condenado el incendio del diario «El Mundo». Hemos condenado la supresión del derecho de reunión a los jóvenes argentinos. Hemos señalado nuestra inquietud sobre el supuesto complot presidencial y lo dijimos en el debate del presupuesto. Felizmente, el propio presidente de la República, con más sabiduría, ha demostrado que ni él cree en el complot. ¿Y para qué inventar esos motivos, que no son más que de deterioro?

Ha dicho el presidente de la República: «Si no me acompañan me voy». Nadie reacciona en la República. Otro día dice el presidente que va hacer un pedido de licencia por un año. Nadie se conmueve en el país. Y ahora aparece un supuesto complot, que felizmente el presidente ha desvirtuado porque eso afecta la imagen en el exterior.

No hagamos nosotros la apología del deterioro institucional argentino. Seremos nosotros los culpables de ese episodio. Por eso, señor presidente, nuestra advertencia tiene un profundo sentido de humildad y de patriotismo. Por eso le contesto al señor senador Fonrouge que ojalá nos equivoquemos. Nuestro camino es concreto y claro: salva las instituciones, salva la autonomía, aplica la Constitución Nacional, porque no es exacto, como aquí se ha dicho, que los artículos 59, 69 y aun el 14 tengan resquicios para negar lo que aquí se quiere negar. Lo ha dicho muy bien el señor senador Bravo. Con acierto lo ha afirmado el señor senador Jáuregui: son problemas que hacen a la autonomía, así la califique como «expresión de pueblo» o como «expresión de gobierno». Aquí se ha querido hacer una confusión de principios invocando conceptos de Yrigoyen y actitudes de Alvear.

La verdad, señor presidente, es que nosotros entendemos que es necesaria una ley. Efectivamente, así es, señor senador Fonrouge; pero no cualquier ley, no cualquier solución. Nosotros indicamos un camino. No validamos el hecho consumado. Este es un «golpe de Estado policial», y consideramos que en esta materia, como bien lo han dicho el señor senador Angeloz en su brillante discurso y los señores senadores Pugliese y de la Rúa, todo el radicalismo tiene una posición concreta y única.

Ha dicho claramente un eminente argentino como el doctor Balbín que nuestra posición respecto a Córdoba fue siempre muy clara por-

que estaba encuadrada dentro de la Constitución, es decir, la intervención al Poder Ejecutivo para posteriormente reponer a los mandatarios elegidos por el pueblo. Eso lo sostuvo el radicalismo desde el primer momento.

Mi partido así lo ha señalado, porque su plataforma lo indica. Nosotros hemos advertido al gobierno nuestras discrepancias. Por ahí hay voces adversarias del radicalismo que quieren negarnos nuestra función opositora o nuestro rol fiscalizador de crítica. Pero se equivocan si pretenden llevarnos a un callejón sin salida o a una aventura contra el orden constitucional y la vigencia de la democracia.

Nosotros, en el análisis realizado en el plenario del radicalismo, por unanimidad señalamos que «la Unión Cívica Radical mantiene el diálogo en todas las direcciones, y principalmente con quienes tienen la responsabilidad del gobierno». «Se cometería un grave error si se interpretara esta inquietud, tendiente a fortalecer la unidad nacional, como una renuncia de la Unión Cívica Radical a cuestionar con decisión y claridad todas aquellas medidas de gobierno que conspiran contra los objetivos básicos de la Constitución o que impiden la ruptura de la dependencia externa y nuestra liberación». Y después se señala un cuadro general de discrepancias con el gobierno en lo político, en los aspectos económico, cultural, gremial y social.

Por esa razón dice el radicalismo en ese documento unánime surgido del plenario, realizado bajo la presidencia de ese digno argentino, el doctor Ricardo Balbín, que es fundamental «que el gobierno reexamine su política y busque en el pueblo una participación protagónica y no contratos de adhesión».

Además, señor presidente, nosotros no estamos aquí para vivir con los precedentes de 1893. Hemos contraído compromisos nuevos, renovados, que no se pueden ni deben eludir. En las coincidencias de la Hora del Pueblo y en el Compromiso de Coincidencias Programáticas, se dice muy concretamente: «La defensa del régimen federal y la descentralización del poder constituyen una garantía esencial de la democracia y de la libertad en contra de la opresión y el despotismo. También lo es la creciente participación del pueblo en los órganos del gobierno».

Es decir que el régimen federal y la descentralización del poder constituyeron compromisos básicos que nosotros defendemos y seguimos cumpliendo; pero exigimos de los que gobiernan el mismo cumplimiento.

Por otra parte, es evidente que estos compromisos de garantías democráticas tienen sus obligaciones y sus características, a las que nosotros no hemos renunciado.

Aquí se ha hablado del alcance de los artículos 59 y 69 de la Constitución. En tal sentido, discrepo fundamentalmente con el señor senador Frugoli y con el señor senador por Salta. En-

tiendo que nuestra Constitución, como lo señala un destacado autor, prevé la intervención con dos aspectos: en primer lugar, como un «pronóstico eficiente», que debe estar a cargo del Congreso; y en segundo lugar, como una «cirugía eficiente», que debe estar a cargo del Poder Ejecutivo, en este caso, del presidente de la Nación.

Temo que el pronóstico del Congreso —del Senado, en esta ocasión— y la cirugía del presidente de la República resulten absolutamente ineficientes y causen serios daños al país.

En verdad, señor presidente, la intervención constituye —como dice Sánchez Viamonte— un acto de soberanía nacional que se hace sentir en sus efectos sobre las autonomías provinciales.

José Manuel Estrada expresa que si el federalismo consiste en la coexistencia de las autonomías locales subordinadas a una soberanía nacional, a ésta le compete conservar el tipo característico de las instituciones, encaminarlas cuando se desvían, porque es suprema, pero protegerlas cuando peligran, porque es poderosa.

Es evidente, señor presidente, que la intervención federal está prevista en los artículos 59 y 69, como lo ha señalado muy bien el señor senador de la Rúa, que mantienen entre sí una relación armónica y coherente. El artículo 59 reconoce a las provincias la titularidad de un poder constituyente de segundo grado, limitado en sus alcances por las propias prescripciones constitucionales. Esta garantía que prevé el artículo 59 constituye una «promesa» o «declaración» que tiene por objeto asegurar la perfecta uniformidad de las instituciones republicanas, las que en este caso no han sido menoscabadas ni deterioradas por ninguno de los tres poderes de Córdoba.

El artículo 69 dice que «El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia».

El Poder Ejecutivo se ha equivocado de camino. Se ha ido a una «reconstrucción» cuando debía ir a «la ejecución». Además, señor presidente, la garantía expresada en el artículo 59 se desenvuelve aquí hasta sus últimas circunstancias, introduciéndose además la distinción entre «intervención de oficio» e «intervención a requisición». De modo que no puede dar lugar a las disquisiciones que se han hecho aquí sobre precedentes anteriores y en cuanto al valor del régimen constitucional.

El artículo 69 fue reformado, como explica el doctor Bidart Campos, en 1860, con la redacción actual. Decía el anterior artículo proyectado: «El gobierno federal interviene con requisición de las legislaturas o gobernadores provinciales o sin ella, en el territorio de cualquiera de las provincias, al solo efecto de restablecer el or-

den público perturbado por la sedición, o por atender a la seguridad nacional, amenazada por un ataque o peligro exterior».

Este artículo 6º fue reformado precisamente por una serie de episodios debidos a la mala aplicación de estas disposiciones durante siete años, y ello dio lugar a un debate trascendente en el Congreso de la Nación, el 12 de agosto de 1857, donde el diputado Laspiur planteó el contenido, alcance e influencia de esta disposición.

Los convencionales de 1860 se preocuparon por este artículo de la Constitución del 53. La redacción del informe estuvo a cargo del general Bartolomé Mitre, y da cuenta de los motivos con que sus miembros apoyaron la reforma. Dijo textualmente: «La intervención del poder federal en las provincias, con requisición de parte o sin ella es un *deber* o un *derecho*. En el primer caso —la requisición—, es una obligación que deriva de las garantías de que habla el artículo 5º de la Constitución: el gobierno federal, en este caso, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. En el segundo caso, sin la requisición, es una facultad que el gobierno federal ejerce por derecho propio, toda vez que las provincias faltan a las estipulaciones de sus compromisos, como por ejemplo si algunas de ellas pretendieran establecer la forma monárquica o perpetuaran el poder contra los principios de la democracia». Así lo dice el informe de la comisión reformadora y que obra en la página 80.

Como se ve, la reforma introducida en el año 1860 tiende a evitar los abusos de aplicación de la actividad interventora del Estado federal, y se apoya en el doble criterio de la «intervención espontánea», facultad del gobierno federal, o de una «intervención a requisición» del gobierno local.

Cuando se explicó a requisición de qué autoridad, le correspondió al mismo Mitre señalar que no había que confundir «constituido en autoridad» con otra «autoridad constituida».

Pero el criterio de los autores, tal el caso de Joaquín V. González y de Bielsa, explica perfectamente esta interpretación.

Yo he querido, señor presidente, señalar estos antecedentes para refutar un poco lo que aquí se ha expresado con respecto a los artículos 5º y 6º de la Constitución.

Como conclusión, puedo sintetizar cuatro principios en esta interpretación o exégesis constitucional.

Primero; el gobierno federal tiene el deber imperioso de intervenir el territorio de una provincia para restablecer sus autoridades depuestas por una sedición.

Segundo; la doctrina es uniforme en esta materia, al consagrar que ese deber que surge tanto de los textos constitucionales analizados como de la propia esencia del régimen federal, no puede ser soslayado sobre la base de la ausencia de una requisición expresa del gobierno afec-

tado por la sedición, cuando el hecho público e incontrovertible de haber sido derrocadas las autoridades de una provincia, suple y explica el silencio de aquéllas, como es el caso de Córdoba.

Tercero; la intervención no puede directa o indirectamente favorecer la causa de una sedición, lo que sucedería, por ejemplo, si en vez de restablecer la autoridad derrocada se la substituyera, como es el caso presente, que se proyecta por la mayoría y por el Poder Ejecutivo.

Cuarto; una vez restablecida la autoridad separada por la sedición, los diversos problemas ideológicos, políticos o de interpretación del dogma del partido gobernante deben ser resueltos conforme a la ley, al trámite y al régimen que establece el sistema de cada provincia, dentro de su autonomía, que nosotros respetamos.

Señor presidente: quiero terminar mis palabras advirtiendo que nuestra línea seguirá siendo invariable.

Nadie nos desviará del camino. Nada nos hará caer en el desaliento. Nadie nos desviará de nuestra marcha.

Queremos, según el pensamiento de un gran argentino, que «el pueblo viva sin pedir permiso al jefe de Policía».

Queremos que la juventud siga creyendo en el derecho y no olvide que la sedición es un delito; que la soberanía popular es la conquista de una nacionalidad.

Queremos, señor presidente, que no haya guerras en la República, ni guerrillas entre los argentinos, ni persecuciones ideológicas, ni depuraciones ni represiones injustificadas.

Queremos salvar el orden constitucional y en Córdoba estamos trabajando por todo lo que ella es para la historia argentina y por todo lo que representa este episodio para el devenir del país.

Con ello queremos salvar las instituciones democráticas y republicanas de la Nación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: me parece que el debate está prácticamente agotado y sólo voy a decir algunas palabras porque interesa al bloque que presido que no queden sin respuesta apreciaciones evidentemente equivocadas que se han formulado con el ánimo sano de sostener posiciones discrepantes con la nuestra, pero que podrían llevar al país a la consecuencia de creer que verdaderamente hay falta grave, complicidad, desatención o error fundamental en la forma como el Poder Ejecutivo ha encarado este grave problema institucional de la provincia de Córdoba.

Yo advierto —y lo hago seguro de que ha sido sin malicia de ninguna clase— que se han dicho cosas que no corresponden a la realidad. Quienes se oponen al dictamen de la mayoría

de la Comisión de Asuntos Constitucionales han supuesto que aprobar ese dictamen e intervenir por el Congreso argentino el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba significa dejar en la impunidad un acto sedicioso. Esto es un error. Nadie, absolutamente nadie, ni el Poder Ejecutivo ni ninguno de los señores senadores de esta bancada mayoritaria han creído, creen o admiten que se pueda creer que en la coyuntura política y social que se ha originado en la provincia de Córdoba el remedio de la intervención que propugnamos va a significar la impunidad de un acto sedicioso. Desde luego, con el mayor énfasis debo manifestar que ni el Poder Ejecutivo ni ninguno de los organismos del Movimiento Justicialista o del Frente Justicialista de Liberación han planificado, instigado o actuado de ninguna manera para que se produzca el hecho calificado de sedicioso del jefe de Policía, ni para que se produzcan los actos que ha originado este señor Navarro en la provincia de Córdoba.

Lo digo enfáticamente, y es uno de los puntos a que me referí al comienzo de mi discurso, porque tal vez sin esa intención, de las palabras que han pronunciado algunos de los señores senadores pudiera quedar en el ambiente o ser recogida en algún ámbito de la República la suposición de que el Poder Ejecutivo nacional, directa o indirectamente, ha tenido algo que ver con este asunto.

El acto sedicioso no va a quedar impune; sólo que no nos corresponde a nosotros su juzgamiento. La apreciación de la conducta del autor del acto sedicioso va a ser realizada por los órganos correspondientes, que son los de la justicia. Y de ninguna manera la circunstancia de que el Senado de la Nación vote esta noche la intervención federal al Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba significa que pueda quedar impune el delito que se haya podido cometer.

Más aún, aunque a esto no se han referido los señores senadores, quiero advertir que tal vez haya falta justiciable, que si lo es va a merecer seguramente la sanción correspondiente, dentro del juego normal de las instituciones de la provincia de Córdoba, de quienes han asumido el gobierno indebidamente, de quienes han recibido el juramento de un gobernador que no podía haber gobernado o haber asumido el gobierno en la forma como lo hizo, de quienes de alguna manera se hayan complicado en actos que sean lesivos de la plena vigencia de las instituciones de la provincia de Córdoba.

Pero esto no es materia nuestra; es materia de la justicia, y será apreciada por los jueces en la debida instancia, sin que de ninguna manera podamos nosotros sentir que nos corresponde asumir las funciones de los juzgadores para establecer esta noche, aquí, un juicio de valor sobre la conducta penal o no de quienes han sido actores de estos sucesos.

También se ha dicho que enviar la intervención al Poder Ejecutivo de la provincia de Cór-

doba, por obra de la ley que estamos dispuestos a votar esta noche, significa consentir el derrocamiento del gobernador de esa provincia. Creo que es otro error. El episodio que da origen a toda esta situación, el levantamiento del jefe de Policía de Córdoba, el apresamiento del gobernador, vicegobernador y otros funcionarios, las circunstancias del juramento del presidente de la Cámara de Diputados, la designación de ministros, el viaje del ministro y la posible consulta ante el Ministerio del Interior, son todos hechos ajenos a la motivación de esta ley de intervención que vamos a dictar esta noche. Son antecedentes, sucesos que han ocurrido, sobre los cuales no podemos cerrar los ojos porque sabemos que han existido y han tenido y pueden producir consecuencias en sus propios ámbitos; pero no es la motivación de esta ley. El mensaje del Poder Ejecutivo, sobre el cual se ha pasado tal vez con alguna ligereza, lo dice claramente al mencionar la circunstancia de que después de los episodios se ha creado una situación en que está afectada la paz interior en la provincia de Córdoba, la tranquilidad pública y hasta la vida de los ciudadanos. Eso es lo que determinó al Poder Ejecutivo a usar, en este caso, el remedio de la intervención.

Desde luego, se trata de una cuestión de apreciación hipotética sobre lo que va a ocurrir con un remedio de esta naturaleza. Yo me veo obligado a repetir esta forma de apreciar la cuestión, porque siempre que el Poder Ejecutivo o esta bancada del Frente ha planteado una solución para alguna cuestión fundamental, nuestros opositores encontraron el lenguaje más pesimista para el futuro. Naturalmente, se trata de una apreciación, de eso que el señor senador Perette llama «el diagnóstico de la situación», para saber si los remedios que vamos a aplicar son justos y eficaces o si no lo son.

No quisiera que se viese en esto un asomo de jactancia, pero quiero mencionar el hecho de que cada vez que se ha usado ese lenguaje pesimista, la realidad consecuente al suceso demostró que nosotros teníamos razón; que no ha ocurrido una catástrofe y que afortunadamente —lo voy a decir aunque se crea que es un acto de obsecuencia, pero no lo es, porque no es mi costumbre— ejerce la alta custodia de los intereses de la República Juan Domingo Perón. Nosotros confiamos en su capacidad, su patriotismo, su visión de lo más conveniente para la Nación y las provincias, para los productores y los trabajadores, los estudiantes y los maestros. Afortunadamente tampoco es un capricho individual lo que marca el rumbo, sino la ejecución de conceptos de una doctrina que enraíza en lo nacional y popular, por lo que el margen de error no es grande, y podemos ostentar una cuota apreciable de aciertos por encima de los errores.

No va a suceder nada catastrófico en Córdoba a través de esta solución que el Senado votará hoy y que el Poder Ejecutivo propicia. Pero no se busca la solución para tapar un hecho sedi-

cioso ni para justificar el derrocamiento; no se la propicia para poner punto final a una cuestión interna de tipo partidista, sino para actuar por encima de circunstancias reales que suceden en este mismo momento en Córdoba, en que la amenaza pende sobre la vida de los habitantes, y las fuerzas que han escapado al control de lo normal se manifiestan en luchas armadas, y para evitar que todo esto siga ocurriendo y poder consolidar, como en Formosa y en Buenos Aires, la posibilidad de realización que el pueblo argentino afirmó al investir en comicios libérrimos a este gobierno que hoy rige los destinos de la Nación.

Nosotros debemos agradecer a los señores senadores de la minoría por haber hecho una exégesis tan pormenorizada de las disposiciones constitucionales y por haber cumplido un repaso de la cuestión doctrinaria sobre el derecho de intervención federal y los casos en que ella procede. Pero creo que ha habido un poco de abundancia y que el enfoque ha sido equivocado. Si nos hubiéramos limitado a esa realidad que buscan el mensaje del Poder Ejecutivo y el dictamen de la comisión en mayoría, tal vez no hubiera sido necesaria tanta disquisición académica.

Sr. Pugliese. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. Martiarena. — Con mucho gusto, señor senador.

Sr. Pugliese. — Yo creo que hubiéramos evitado las disquisiciones académicas que el señor senador señala si el mensaje del Poder Ejecutivo, en lugar de enunciar el hecho, hubiera traído datos. Porque usted mismo reconoce que son maneras de apreciación; y yo he dicho en mi discurso que aquí hacía falta una investigación exhaustiva, para saber si el clima que existía era el real o resultaba prefabricado. Sin embargo, el mensaje dice que el clima se ha creado en Córdoba a partir de la recuperación de la libertad de los señores gobernador y vicegobernador de Córdoba. Es decir, que no ha comenzado cuando se produjo el acto de sedición. Además, no hay malicia de nuestra parte...

Sr. Martiarena. — He dicho que creo que ha sido sin malicia.

Sr. Pugliese. — Le voy a explicar por qué no hay malicia. No es porque usted no lo crea, sino porque nuestra posición está fundada en hechos que no han sido desmentidos.

Así como nos hemos referido a las crónicas periodísticas, diremos que ellas han expresado que quien ejerce el gobierno de Córdoba, el doctor Agodino, ha dicho que se encontraba respaldado en todos sus actos por el excelentísimo señor presidente de la Nación, y a renglón seguido repuso en su cargo al jefe sedicioso. De manera tal que hasta el momento en que usted acaba de decir que cree que va a ser castigado este acto sedicioso, no había habido en el recinto una sola palabra que lo expresara. Simplemente, el señor miembro informante había dicho que el acto sedicioso tuvo lugar y ya había pasado. Fíjense que si esta teoría se aplicara en

el país frente a los actos sediciosos que ocurrieron desde Yrigoyen a Perón, que son figuras gratas para ustedes y nosotros, expresariamos que el acto sedicioso ocurrió pero ya pasó y no tendría justificación todo lo que hemos estado diciendo en el país para que esto no vuelva a ocurrir.

De manera, señor senador, que le diría que nosotros no nos hemos desviado del acto político. Si, precisamente, hemos dado argumentos académicos ha sido para no apartarnos de la ley y no entrar en el caos. Pero, si hubiéramos entrado a las consideraciones políticas, tal vez nos habrían dicho que no nos inmiscuyéramos en sus procesos internos, como hemos sido advertidos.

Es evidente que también existe un hecho político, para el cual creemos que el remedio que se da no es el justo ni va a resolver la paz de la provincia de Córdoba, sino que es el contraindicado. Al respecto desearía equivocarme, porque no me gusta ser pesimista.

Como hombre de la provincia de Buenos Aires me alegra que la solución que se le haya dado sea la que corresponda a las instituciones, favorezca a un sector u otro, tal como lo hemos dicho. Pero no considero que la provincia de Buenos Aires fuera un caos antes y que ahora no lo sea.

Estimo que esto no es exacto, porque además de no haber existido un caos, continúa actualmente con las mismas deficiencias anteriores. Ignoro si han mejorado las relaciones del partido gobernante, pero como hombre de la provincia de Buenos Aires le digo al señor senador que las deficiencias que se evidenciaban en ella existen actualmente, a no ser que afirmemos en este recinto que el anterior gobernador fuera el responsable del hecho de Azul, lo que no creo que nadie pueda afirmar, ni siquiera sospechar.

Muchas gracias, señor senador.

Sr. Martiarena. — Lamento mucho que el señor senador no me haya interpretado cuando hablé de la responsabilidad de los que han producido el acto sedicioso en la provincia de Córdoba.

No he dicho que se va a condenar. He expresado que se va a juzgar y que no nos corresponde a nosotros dicho juzgamiento. De manera que hago esta pequeña rectificación con relación a la interpretación que el señor senador ha dado a mis palabras.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, la discrepancia es fundamental, porque aunque el señor senador Pugliese es hombre de esa provincia nosotros también vivimos la realidad de ella por su proximidad con nuestras actividades, y puedo asegurarle que, afortunadamente, se ha operado un cambio en las circunstancias sociales y políticas que resulta muy evidente y marca un sensible progreso en la conducta de las agrupaciones y sectores políticos que se desenvuelven en la provincia de Buenos Aires.

Otra de las censuras que se han formulado contra la actitud del Poder Ejecutivo es que éste, frente a los sucesos de Córdoba, ha creído que primero debía dejar jugar a las instituciones provinciales. Yo me atrevo a decir que si en lugar de mandar un mensaje primero informando al Congreso argentino las circunstancias que vivía Córdoba, se hubiera dispuesto la intervención por decreto, el Poder Ejecutivo hubiera sido tal vez censurado por ceder la autonomía provincial sin dar participación al Parlamento. Lo que sucede es que en esta materia es un poco difícil acertar siempre.

Desde luego, yo defiendiendo la posición del Poder Ejecutivo, no sólo por la solidaridad que marca la actuación política sino porque la forma como ha obrado me parece razonable. Ha querido que sean los mismos cordobeses, a través de las instituciones de la provincia, los que buscasen su propia solución. Pero cuando esa solución no fue posible y los acontecimientos desbordan a las instituciones locales, recurre a nosotros para indicarnos la necesidad de un remedio urgente a través de la intervención, que vaya a restablecer la paz y recuperar los márgenes de tranquilidad que necesitan la provincia y sus habitantes.

No hay ninguna culpa del gobierno en el proceso que está viviendo Córdoba. El gobierno nacional no tiene nada que ver en este episodio. Podría decirse que sí; que existe una tan amplia solidaridad política que determina que hombres de la misma extracción ejerzan el gobierno de la provincia de Córdoba, como nosotros nos sentamos en estas bancas y el general Perón ejerce la presidencia de la República. Pero es hilar un poco fino y creemos que realmente no se puede afirmar que el presidente de la República tiene la culpa de que haya ocurrido lo que está sucediendo en Córdoba.

Además, éste no es un asunto que afecte únicamente al justicialismo. Por más que se haya dicho que el justicialismo está buscando, por la intervención, la solución de un pleito interno, yo afirmo que lo que sucede en Córdoba —y lo han reconocido algunos de los oradores de la minoría— es un fenómeno que se produce por las circunstancias propias de la época que vivimos. Venimos de un proceso muy enrevesado, demasiado enredado. Venimos de dieciocho años en que, por una u otra razón, los argentinos hemos estado luchando, cada uno en su trinchera, por los ideales o aspiraciones que creíamos merecían nuestro sacrificio y esfuerzo.

Ha sido una verdadera torre de Babel en la que no nos entendíamos para nada y nos atacábamos todos los días. Venimos de una confusión ideológica en que, bajo la misma bandera, se agrupaba gente de distinto signo doctrinario. Todo esto viene a reventar ahora en muchas partes de la República.

Nosotros no ocultamos cuál es la situación de la Nación, pero yo declino que eso sea un problema del justicialismo sino que lo es de la República, porque existe en todos los ámbitos, debido a esta situación que se ha ido creando a consecuencia de todo aquello de lo que hemos sido actores o víctimas. Pero hemos sido protagonistas durante muchos años y esto ha estallado ahora, en este año 1974, cuando estamos en función de gobierno y tenemos la gran responsabilidad y preocupación de procurar el encauzamiento de todas las fuerzas que se mueven en la República para que todos juntos marchemos hacia la consecución de los ideales comunes.

De manera que aquí no se puede hablar de la culpa del gobierno nacional como tampoco se puede hablar del pleito interno del justicialismo. Lo miramos con objetividad y con lealtad. Esto es lo que está sucediendo en muchas partes del país y pienso que vamos a tener encuentros de esta naturaleza entre gentes que ejerce en función de gobierno y otra que expresa su disconformidad. Y más aún, dentro del justicialismo esto se da también con nuestras propias autoridades y no quiero entrar a hacer críticas de las demás agrupaciones políticas, pero éste no es de ninguna manera un «privilegio» nuestro porque advierto, a través de la información que recibimos todos los días, aunque sea por los diarios, que lo mismo ocurre en las demás agrupaciones políticas.

Sr. Perette. — En todas partes se cuecen habas.

Sr. Martiarena. — Exactamente. Esperemos que no sea a calderadas.

Sr. Perette. — Usted está partiendo de una base que es la que yo he reconocido. Nosotros no entramos en el problema intestino del justicialismo.

Sr. Martiarena. — El señor senador Perette ha dicho que de lo que se trata es de que busquemos aquí la seguridad y vamos a esa búsqueda porque eso es lo importante para todos.

Coincidimos en que la seguridad individual y de las instituciones debe tener vigencia permanente. Creemos que así debe ser y confiamos en que una ley como esta que vamos a votar esta noche es lo que va a dar esa seguridad que anhela el sector de la minoría.

Nos parece que las condiciones en que se desenvuelve la provincia de Córdoba hacen contraindicado el tratamiento sugerido por la Unión Cívica Radical. No advierto cómo podría en este momento votarse una ley para que el gobernador y el vicegobernador de Córdoba sean repuestos en sus cargos anteriores, para que mañana tengamos que abrir un nuevo debate a fin de buscar el remedio a la situación desencadenada, y que no vamos a frenar con este retorno del señor Obregón Cano al gobierno de la provincia de Córdoba.

En definitiva, es una cuestión de confianza en el futuro y en los actos que cada uno produce.

Nosotros vamos a votar este despacho de la mayoría con una pequeña modificación en el artículo 2º, porque estamos firmemente convencidos de que la situación de Córdoba no admite otro remedio. Es lo que ha indicado el señor senador Frugoli como fundamento de su voto, aunque también ha incurrido, en mi modesta opinión, en el error común que acabo de señalar, al decir que ha habido una grave falta del Poder Ejecutivo. Y en el tren de achacarle una grave falta al Poder Ejecutivo por no haber arbitrado el remedio en su oportunidad, caemos en el terreno de la imprecisión de las apreciaciones subjetivas sobre estos episodios.

Vamos a votar con tranquilidad de conciencia, seguros de que no estamos allanando injustificadamente una autonomía provincial. Estamos convencidos de que Córdoba merece nuestra atención y respeto y el esfuerzo para acertar la solución, convencidos, sinceramente, de que este camino, que arbitramos en apoyo de la apreciación que ha hecho el Poder Ejecutivo, en posesión de todos los elementos de juicio que le brinda la situación de la provincia, es la vía recta y correcta para que Córdoba vaya de nuevo al encauzamiento de sus instituciones y podamos decir que se supera este desgraciado episodio que le toca vivir a toda la República.

Nada más.

Sr. Perette. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Como he sido mencionado por el señor senador Martiarena, debo hacer algunas reflexiones.

En primer término, yo no me he ubicado en una posición pesimista. He dicho todo lo contrario. De manera que no deseo que mis palabras sean desvirtuadas o mal interpretadas. He dicho, señor presidente, que en este caso el diagnóstico es equivocado y la cirugía ineficiente, y esto no es pesimismo. Es una convicción. Se trata de un pensamiento avalado por la exposición de los señores senadores de nuestro bloque y de los distintos sectores de opinión de la República.

Observe, señor presidente, que queremos procesos que no hagan a ninguna desintegración argentina; pero ocurre que el proceso de desintegración sucede hasta en los propios sectores del Frente, donde hay figuras destacadas que se han pronunciado públicamente en contra de esta intervención; nosotros estamos buscando una función integradora y no disociadora.

No somos pesimistas. Yo no he dicho personalmente que el señor presidente de la República haya armado la preparación de este ataque o de esta sedición. Si lo creyera, lo diría concretamente, como lo dije en todos los demás aspectos. Más aún, he dicho, en contra de lo que sugiere el señor senador, que todos tenemos el deber de cuidar la imagen presidencial porque le interesa al país dentro y fuera de la República.

De manera que nuestras opiniones y conceptos son perfectamente delineados.

En cuanto a cuáles son los aciertos de uno u otro sector, vuelvo a repetir lo dicho anteriormente: desearíamos que todas nuestras predicciones fueran equivocadas, pero tenemos el derecho, la obligación moral y la convicción jurídica y cívica de decir lo que pensamos para advertir los errores del mañana.

De modo que dejo fijada nuestra posición, ratificando los discursos expuestos por los señores senadores Angeloz, Pugliese y de la Rúa, que, en mi opinión, se mantienen en plena vigencia, anticipando que vamos a votar nuestro dictamen, por lo que no hemos de participar en el debate en particular, ya que nos remitimos a los fundamentos que hemos expuesto en el debate en general.

Nada más, señor presidente.

Sr. Fonrouge. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Fonrouge. — Quería señalar que puede muy bien el señor senador Pugliese considerar ligero el argumento de que ha habido sedición y que ya pasó. Yo deseo expresar que mi reflexión responde a que no he oído ni he visto, ni se ha hecho público por lo menos, que algún fiscal del orden judicial de la provincia de Córdoba haya deducido querrela alguna con motivo de los hechos que a todos nosotros nos preocupan, de acuerdo con lo que ordena e indica el artículo 134 de la Constitución local.

Sr. Presidente (Allende). — Si ningún señor senador hace uso de la palabra se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Allende). — Han votado 46 señores senadores por la afirmativa y 14 por la negativa sobre 60 señores senadores presentes.

Se va a votar en particular.

—Se lee y aprueba, sin observaciones, el artículo 1º.

—Se lee el artículo 2º.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Voy a solicitar que al final del texto propuesto por la comisión se agregue: «Asumirá el Poder Ejecutivo y procederá a su reorganización».

Esto es para salvar cualquier duda que pudiese existir acerca de la subsistencia del mandato que pueda creer que ejerce el señor presidente de la Cámara de Diputados de Córdoba o cualquier funcionario a quien pudiese corresponderle la sucesión por disposiciones constitucionales de esa provincia.

El artículo 2º quedaría así redactado: «El delegado federal decretará la caducidad de los mandatos del señor gobernador y del señor vicegobernador, asumirá el Poder Ejecutivo y procederá a su reorganización».

Sr. Presidente (Allende). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Fonrouge. — La comisión acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Allende). — En consecuencia, se va a votar el artículo 2º con la modificación propuesta por el señor presidente del bloque de la mayoría y aceptada por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 3º.

—El artículo 4º es de forma.

Sr. Presidente (Allende). — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

6

MOCION

Sr. Presidente (Allende). — Se encuentra reservado en Secretaría un proyecto de comunicación de los señores senadores Baroni y Rodríguez sobre medidas con motivo de las inundaciones en la provincia del Chaco.

Sr. Rodríguez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. Rodríguez. — Dado lo avanzado de la hora, solicito que quede reservado en Secretaría el proyecto para ser tratado en la próxima sesión.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Allende). — No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

—Es la hora 2 y 45 del día 5 de marzo.

ADOLFO STRASBERG.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.

7

A P E N D I C E

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Intervención a la provincia de Córdoba

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase intervenida la provincia de Córdoba, a los efectos de restablecer su forma republicana de gobierno.

Art. 2º — El delegado federal decretará la caducidad de los mandatos del señor gobernador y del señor vicegobernador, asumirá el Poder Ejecutivo y procederá a su reorganización.

Art. 3º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de «Rentas generales», con imputación a la misma.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.